



ESTRATEGIA PAÍS BOLIVIA 20²⁵₃₀

CAF BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

 **América
Latina y
el Caribe**
Cada camino
una oportunidad



El banco verde y el banco del crecimiento sostenible e inclusivo



Contenido

1

2

Prólogo

| Pág. 7

Resumen
ejecutivo

| Pág. 8

Marco analítico: Contexto económico
y brechas de desarrollo sectoriales

| Pág. 12

3

4

Acción CAF
en Bolivia

| Pág. 26

Prioridades del plan de Gobierno
del Estado Plurinacional de Bolivia

| Pág. 32

5

6

Estrategia
país

| Pág. 36

Referencias

| Pág. 56



Prólogo

La relación entre CAF - banco de desarrollo de América Latina y el Caribe y el Estado Plurinacional de Bolivia se remonta a los orígenes mismos de la institución. Bolivia no solo fue uno de nuestros países fundadores, sino que ha desempeñado un papel sustantivo en la configuración de la identidad, la visión y la proyección regional de CAF.

La impronta boliviana se refleja con claridad en los cuadros técnicos y directivos que impulsaron una etapa decisiva de expansión y posicionamiento internacional del banco entre la última década del siglo XX y los primeros lustros del siglo XXI, en un período de profunda transformación de la banca de desarrollo a nivel internacional. Dicha fase constituyó un punto de inflexión en nuestra historia, al consolidar a CAF como una institución financieramente sólida, comercialmente innovadora y profundamente comprometida con el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe.

Esta trayectoria compartida confiere a la relación entre Bolivia y CAF una fuerza singular. No se trata únicamente de una cooperación financiera sostenida en el tiempo, sino de una alianza estratégica forjada en la convicción de que el progreso de cada país fortalece, de manera integral y sostenida, el desarrollo de la región en su conjunto.

En el contexto actual —marcado por un entorno internacional complejo, dinámicas geopolíticas en transformación y presiones macroeconómicas significativas que tensionan los márgenes de acción de las economías nacionales— Bolivia enfrenta desafíos estructurales

y coyunturales que demandan respuestas integrales y sostenidas para potenciar los activos estratégicos de alto valor con los que cuenta el país: una riqueza excepcional en recursos naturales y biodiversidad, una diversidad cultural que constituye un rasgo identitario distintivo, una población mayoritariamente joven y una localización geográfica estratégica en el corazón de Sudamérica. Estas fortalezas configuran una base sólida para avanzar hacia una mayor diversificación productiva, la generación de valor agregado y la consolidación de un modelo de desarrollo más resiliente, inclusivo y sostenible.

En este escenario, CAF reafirma su decidido compromiso de continuar acompañando a Bolivia mediante productos de financiamiento robustos e innovadores, complementados con asistencia técnica especializada que promueva la generación de conocimiento aplicado, contribuyendo así a consolidar una senda de crecimiento convergente, ambientalmente sostenible y socialmente inclusiva para el país.

Con el propósito de contar con una hoja de ruta que oriente la consecución de estos objetivos, CAF preparó la presente Estrategia País 2025 – 2030, construida a partir de un proceso de escucha activa, análisis riguroso y reflexión conjunta con actores de los sectores público, privado, académico y de la sociedad civil, asegurando con ello la pertinencia y el potencial de las propuestas formuladas y fortaleciendo la apropiación nacional del proceso estratégico.

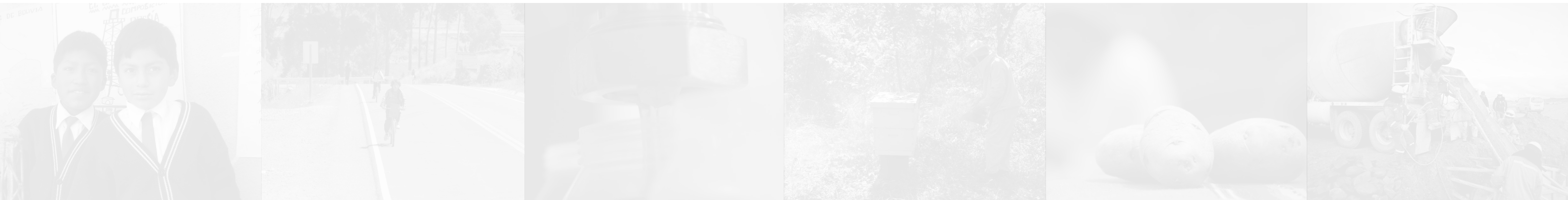
La Estrategia se articula en torno a cuatro pilares estratégicos, alineados con las prioridades de las



autoridades nacionales: (i) el apoyo a la estabilidad macroeconómica y al fortalecimiento institucional, orientado a reducir vulnerabilidades y asegurar la continuidad de políticas públicas prioritarias; (ii) el impulso a la integración nacional y regional, así como a la diversificación productiva y de servicios, mediante inversiones en infraestructura, logística, conectividad, riego, energía y digitalización; (iii) la promoción del bienestar, la inclusión social y el desarrollo territorial con enfoque de género, dirigida a cerrar brechas sociales y fortalecer el capital humano a través de intervenciones en agua, vivienda, salud y educación; y (iv) el fomento de la sostenibilidad ambiental y la acción climática, apoyando la transición energética, el uso sostenible de la biodiversidad y el desarrollo de finanzas verdes que refuercen la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático.

Bolivia y CAF comparten una historia que se entrelaza con la propia construcción de la integración regional. Esa historia —larga, sólida y vibrante— constituye el fundamento sobre el cual se proyecta la continuidad de una colaboración estratégica orientada a reforzar las bases de un desarrollo sostenible, inclusivo y de largo plazo, que se traduzca en prosperidad, bienestar y oportunidades para las generaciones presentes y futuras.

Sergio Díaz-Granados Guida
Presidente Ejecutivo de CAF



1 RESUMEN EJECUTIVO

Bolivia cuenta con un significativo potencial de desarrollo, sustentado en su riqueza de recursos naturales, su diversidad cultural, una población mayoritariamente joven y una ubicación estratégica en el corazón de Sudamérica, con capacidades para avanzar hacia una mayor diversificación productiva, incorporando valor agregado en sectores como alimentos, manufacturas y servicios especializados, incluido el turismo sostenible. Sin embargo, el país enfrenta un escenario macroeconómico, social y ambiental desafiante, caracterizado por la acumulación de vulnerabilidades estructurales y desequilibrios de corto plazo, en un contexto de creciente presión sobre la estabilidad económica y la cohesión social.



El auge gasífero permitió avances significativos en términos de desarrollo de infraestructura, acceso a servicios básicos y reducción de la pobreza; sin embargo, no logró consolidar un modelo de crecimiento sostenible. Tras el fin del superciclo de materias primas y en un contexto de persistentes déficits macroeconómicos, la situación económica y social se deterioró, con impactos adversos sobre el crecimiento, la inflación y los niveles de pobreza. Esta situación evidencia la necesidad de impulsar un proceso de ajuste y transformación que permita restablecer la estabilidad macroeconómica y sentar las bases de un desarrollo más resiliente, inclusivo y sostenible.

A lo largo de su historia conjunta, CAF se ha consolidado como un socio estratégico para Bolivia, acompañando al país en su trayectoria de desarrollo mediante proyectos que han fortalecido la infraestructura vial, el acceso a agua y saneamiento, la salud, la educación, el turismo y la resiliencia climática. En los últimos

años, su acción se ha alineado con las prioridades nacionales de planificación y se ha articulado en torno a pilares fundamentales como son la estabilidad macroeconómica, la productividad, el acceso equitativo a servicios básicos y la conservación del capital natural con un enfoque de sostenibilidad y adaptación al cambio climático.

El accionar de CAF ha permitido el desarrollo de una cartera cercana a los USD 3.000 millones, con una aprobación de créditos por USD 2.950 millones en el período 2020-2024, lo que equivale a un promedio anual de aproximadamente USD 590 millones y desembolsos promedio de USD 330 millones. Este desempeño sitúa a Bolivia como el quinto país con la cartera más alta de CAF, representando alrededor del 8 % del total de CAF. Tal posicionamiento confirma no solo la importancia de la relación con un país miembro fundador, sino también la confianza mutua en la capacidad de transformar estos recursos en resultados concretos de impacto económico, social y ambiental.

La Estrategia país de CAF en el contexto de un nuevo período gubernamental en Bolivia 2025-2030, se consolida en una propuesta de acciones denominada Programa de Apoyo para la Recuperación Económica (PAREC) para el siguiente quinquenio. Dicho programa se articula en torno a cuatro pilares estratégicos, orientados a transformar los desafíos estructurales en oportunidades de desarrollo sostenible e inclusivo y que se vinculan con los siete ejes planteados para el plan de desarrollo económico y social del gobierno del presidente Rodrigo Paz:

- 1) Bolivia, economía para la gente;
- 2) Bolivia en el mundo;
- 3) Bolivia moderna y eficiente;
- 4) Bolivia 50/50;
- 5) Bolivia transparente;
- 6) Bolivia resiliente;
- y 7) Bolivia con calidad de vida y desarrollo humano.

El primer pilar apunta a apoyar la estabilidad macroeconómica y fortalecer la institucionalidad

del Estado, combinando programas de liquidez con cooperación técnica orientada a fortalecer las capacidades públicas, modernizar marcos regulatorios y garantizar la continuidad de políticas públicas prioritarias.

El segundo pilar se centra en profundizar la integración nacional y regional, posicionando a Bolivia como plataforma de conexión bioceánica mediante programas estratégicos en corredores viales, logísticos, digitales que impulsen la productividad y la competitividad. Asimismo, contempla programas que mejoren la capacidad productiva, a través de riego, la conectividad y digitalización, y la provisión de energía para la diversificación productiva.

El tercer pilar de acción se concentra en acciones destinadas a impulsar el bienestar, la inclusión y el desarrollo social, con una perspectiva de género y diversidad, a través de programas en seguridad hídrica, vivienda, salud, educación,

cuidado y arraigo comunitario, diseñados para cerrar brechas sociales, fortalecer el capital humano y garantizar la cohesión territorial.

Finalmente, el cuarto pilar se orienta a impulsar acciones para promover la sostenibilidad ambiental y la acción climática, con énfasis en la transición energética, el uso sostenible de la biodiversidad y el desarrollo de mecanismos financieros verdes que refuercen la resiliencia frente al cambio climático.

Con este objetivo, en los próximos 5 años, CAF podría canalizar recursos por hasta USD 3.100 millones, proyectando un impacto estimado en el crecimiento del PIB de 1,1 puntos porcentuales, la generación de más de 100 mil empleos directos e indirectos, y un impacto en más de 3 millones de beneficiarios a través de intervenciones en sectores estratégicos para el desarrollo nacional.





2 MARCO ANALÍTICO

Contexto económico y brechas de desarrollo sectoriales

Bolivia cuenta con un amplio potencial de desarrollo, sustentado en su riqueza natural, diversidad cultural y territorial, su ubicación estratégica y una población joven con capacidad de trabajar e innovar. En las últimas décadas, pese a diversos desafíos internos y externos, el país ha demostrado resiliencia frente a contextos económicos complejos y ha logrado avances sociales de importancia, al tiempo que ha enfrentado crecientes desafíos ambientales y otros referidos a los ámbitos de seguridad y justicia.

Cada nuevo periodo de gobierno representa una oportunidad para dinamizar las capacidades productivas, coordinar a los actores económicos y sociales y canalizar el financiamiento disponible, con el objetivo de abrir una nueva etapa de crecimiento y bienestar sostenibles. En este escenario, resulta impostergable sentar las bases para recuperar una **estabilidad macroeconómica** que permita profundizar la **integración nacional y regional**, impulsar la productividad, la **competitividad y la diversificación productiva**, dar continuidad a los avances en **bienestar e inclusión social**, fortalecer la sostenibilidad ambiental e impulsar un **Estado eficiente, efectivo y habilitante del desarrollo sostenible**.

Aspectos macroeconómicos



El modelo económico actual es dependiente del desempeño del sector de hidrocarburos.

Entre 2003 y 2014, el auge de las exportaciones de gas natural y los elevados precios internacionales impulsaron un periodo de crecimiento sostenido, acumulación de reservas internacionales y avances sociales significativos,

evidenciados en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Este patrón, si bien permitió aprovechar el impulso del sector, puso límites a los incentivos para el desarrollo de otras actividades productivas, restringió la participación del sector privado y consolidó una mayor dependencia de un sector altamente expuesto a la volatilidad externa.

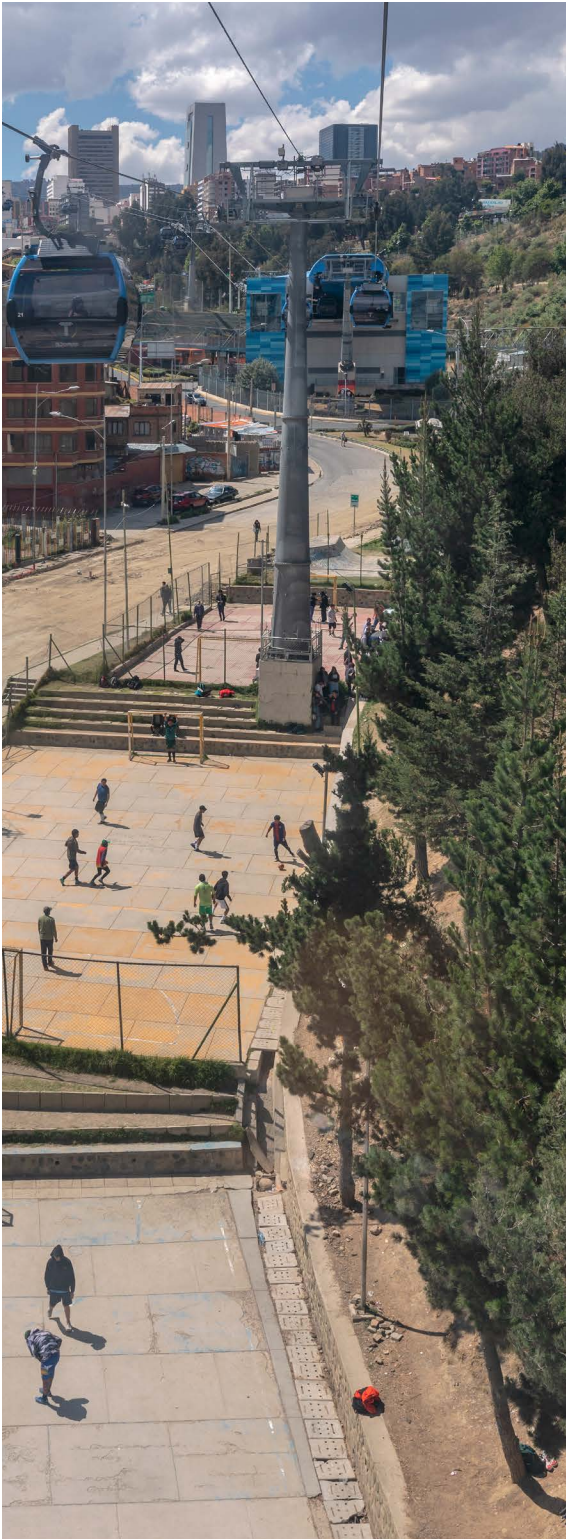
La postergación de los ajustes macroeconómicos necesarios para preservar la sostenibilidad del modelo generó desequilibrios crecientes. Tras el fin del superciclo de materias primas, se priorizó sostener el crecimiento de corto plazo utilizando ahorros y recursos fiscales. Como resultado, el país registró una década de déficits fiscales que promediaron 6,9 % del PIB, un aumento del gasto corriente y el incremento del endeudamiento como fuente de financiamiento, llevando la deuda pública a 78,6 % del PIB en 2024. Además, frente a las restricciones para acceder a financiamiento externo, se incrementó la toma de créditos a través del Banco Central, lo que impactó de manera directa en la inflación y la sostenibilidad fiscal. La reducción del espacio fiscal también limitó la capacidad del Estado para implementar políticas públicas que permitieran continuar los avances sociales alcanzados en los años previos.

La sostenibilidad externa también se vio comprometida por la dependencia de las exportaciones de hidrocarburos y la vigencia de un tipo de cambio fijo desde 2011. Esta combinación derivó en déficits de cuenta corriente en la mayoría de los años desde 2014 y en ausencia de flujos significativos de inversión extranjera directa. Dichos déficits fueron financiados principalmente mediante el uso de Reservas Internacionales. Como consecuencia, las Reservas Internacionales Netas (RIN) se redujeron de 41,7 % del PIB en 2012 a 3,2 % en 2023, experimentando una recuperación moderada hasta 5,9 % del PIB en septiembre de

2025, explicada en gran medida por la revalorización del precio del oro. No obstante, los bajos niveles de liquidez externa, en un contexto de contracción de exportaciones y de restricciones crecientes en la disponibilidad de divisas, han incrementado los riesgos sobre el balance externo y ha propiciado la aparición de un mercado de cambios paralelo.

La contracción estructural de la producción de hidrocarburos constituye uno de los principales factores de vulnerabilidad externa y fiscal para Bolivia. La falta de inversiones en exploración durante la última década redujo las reservas probadas y provocó una caída de la producción de gas del 46 % en ese mismo periodo¹. Este descenso ha limitado el potencial exportador del país y, al mismo tiempo, ha intensificado la dependencia de combustibles importados, que además son subsidiados, con efectos directos sobre las cuentas fiscales (5,1 % del PIB en 2024) y sobre la demanda de divisas en un contexto de iliquidez.

En este contexto, el entorno inflacionario se tornó complejo. La combinación de financiamiento interno creciente y el desacople cambiario presionó sobre los precios, llevando la inflación a 24 % en agosto de 2025, niveles no registrados desde finales de la década de 1980. Este escenario condiciona el margen de acción de la política económica e impacta en los hogares, poniendo en riesgo la continuidad de los avances sociales alcanzados en décadas anteriores.



1. La producción de gas natural pasó de 60,8 MMmcd en 2014 a 32,6 MMmcd en 2024.

La situación macroeconómica condiciona la capacidad de Bolivia para sostener los niveles de inversión necesarios para impulsar la productividad y la diversificación productiva, en un contexto de crecientes desequilibrios fiscales y externos.

Estas restricciones limitan el espacio para financiar infraestructura y políticas de desarrollo. A nivel territorial, los gobiernos subnacionales —altamente dependientes de transferencias asociadas a los ingresos por hidrocarburos y con capacidades institucionales heterogéneas— enfrentan márgenes acotados para la provisión de servicios y la ejecución de proyectos de calidad.

El modelo de crecimiento vigente ha priorizado el rol del sector público, con incentivos limitados para la participación del sector privado. Un marco regulatorio desafiante, caracterizado por altos niveles de intervención y participación estatal en diversos sectores, controles de precios, restricciones al uso de divisas, inseguridad jurídica y una

conectividad limitada han incidido negativamente en la formación de capital privado. A ello se suma una eficiencia y ejecución limitada de la inversión pública. Persisten altos niveles de burocracia, trámites complejos y marcos regulatorios desactualizados que retrasan proyectos y elevan costos, en un contexto de capacidades institucionales heterogéneas y superposición de funciones que dificulta la coordinación entre niveles de gobierno.

En este escenario, mejorar la gestión institucional, fortalecer la transparencia en la contratación pública y la priorización del gasto, junto con el desarrollo de mecanismos que movilicen inversión privada complementaria, resultan elementos clave para sostener y expandir la infraestructura en un entorno fiscal restrictivo.

La institucionalidad en Bolivia presenta desafíos relativos a la coordinación y el fortalecimiento de sus capacidades de gestión. El país se ubica por debajo del promedio regional en

Calidad Regulatoria y Eficacia Gubernamental, con reguladores que cuentan con recursos e instrumentos limitados y una provisión descentralizada de servicios básicos que demanda mayor autonomía y articulación. Resulta prioritario modernizar la regulación y planificación en sectores estratégicos como infraestructura, transporte y sectores vinculados a las telecomunicaciones y lo digital.

En transporte, la ausencia de un marco nacional de planificación articulado con infraestructura vial dificulta el diseño de soluciones multimodales y el desarrollo de corredores logísticos eficientes. En el ámbito digital, persisten bajos niveles de interoperabilidad y de adopción de gobierno electrónico, con margen para mejorar eficiencia y capacidad de respuesta del Estado. Asimismo, la conservación de la infraestructura requiere consolidar esquemas de financiamiento estables y estándares técnicos homogéneos que permitan sostener su mantenimiento y rehabilitación.

desafíos estructurales que requieren ser atendidos para continuar con los avances y reducir las brechas sociales. En este marco, uno de los desafíos clave es fortalecer y adecuar mejor el sistema de protección social para responder de manera más efectiva a las necesidades de la población.

En las últimas dos décadas, Bolivia ha logrado avances importantes en el acceso a servicios orientados a mejorar la calidad de vida. Particularmente en lo relativo a mejoras en el acceso a servicios de agua potable, saneamiento y electricidad. Sin embargo, a pesar de estos logros, persisten desafíos significativos en términos de cobertura, calidad y sostenibilidad, especialmente en zonas rurales y en poblaciones indígenas. Estas brechas son críticas en el acceso a saneamiento: el 47 % de la población del área rural no tiene acceso incluso a saneamiento básico (JMP, 2025)³. En el ámbito urbano, el 29 % de la población urbana carece de alcantarillado, principalmente en zonas periurbanas; la brecha es mayor en el tratamiento de

aguas residuales. Este situación evidencia la necesidad de priorizar el saneamiento periurbano y rural como una política estratégica para reducir brechas territoriales y avanzar hacia un desarrollo más equitativo y sostenible.

Por su parte, la urbanización acelerada y desigual ha provocado la expansión de periferias metropolitanas, caracterizadas por la proliferación de viviendas de baja calidad y carentes de servicios básicos⁴. La expansión urbana informal y la precariedad de los entornos residenciales suelen asociarse a mayores niveles de vulnerabilidad y percepción de inseguridad⁵. Si bien la conectividad digital en los hogares creció de 43 % a 75 % entre 2019 y 2023, el costo de la canasta digital aún limita el acceso en los sectores más vulnerables y persisten brechas urbano-rurales (85,7 % frente a 49,3 %) de personas con discapacidad y de género en el acceso a computadoras e internet. Superar estas diferencias será clave para consolidar la inclusión digital y potenciar el desarrollo humano.

Existen desafíos estructurales importantes en el acceso y la calidad de los servicios de salud. A pesar del aumento del gasto en salud, cuya participación en el PIB se duplicó en dos décadas (2000-2020) pasando de 4,4 % del PIB a 8,2 %, aún se evidencian desafíos relacionados a la fragmentación institucional, el equipamiento limitado, la baja formación actualizada de personal médico y la escasez de personal. Estas limitaciones se evidencian en una elevada tasa de mortalidad infantil de 19,6 por cada 1.000 nacidos vivos, superior al promedio regional (13,5), y en una elevada tasa de mortalidad materna de 160 por cada 100.000 nacidos vivos, superior al promedio de América Latina y el Caribe (45). Otros indicadores, como la desnutrición crónica infantil (14,4 %)⁶ y la disponibilidad de camas hospitalarias (1,5 por cada 1.000 habitantes, por debajo del estándar recomendado por la OMS), evidencian brechas significativas de atención e infraestructura, lo que limita la capacidad de respuesta ante emergencias y enfermedades prevenibles.

Desarrollo social y servicios básicos



Bolivia se ha destacado como una de las economías con mayores avances sociales en las dos primeras décadas del siglo XXI (2000-2023). La pobreza y desigualdad se redujeron de manera sostenida desde el 2000: la pobreza cayó a casi la mitad en 20 años (del 63 % en el 2000 al 36 % en el

2023) y el índice de Gini, que mide la desigualdad, descendió 18,6 puntos en el mismo período. Sin embargo, en la última década estos avances se han ralentizado, en un contexto de menor margen fiscal para la implementación de políticas sociales. No obstante, y a pesar de las mejoras en pobreza y pobreza

extrema, su incidencia es todavía alta comparada con otros países de la región y es consistentemente mayor en el área rural², concentrándose en poblaciones en situación de vulnerabilidad como mujeres, pueblos indígenas y niñas y niños, y hogares con personas con discapacidad, lo que evidencia



- Más de 700 mil personas del ámbito rural carecen de acceso a servicios básicos de agua potable y se eleva a 1,36 millones que no disponen de agua en la vivienda (JMP, 2025); en el urbano, la intermitencia del servicio de agua afecta a más de 1,7 millones de habitantes. En el saneamiento, la brecha rural constituye uno de los principales desafíos estructurales del país, alrededor de 1,6 millones de personas no cuenta con servicios básicos de saneamiento (JMP, 2025), que equivale a que una de cada dos personas del ámbito rural no disponga de servicio básico de saneamiento, situación que tiene impactos directos en la salud pública, la contaminación de fuentes de agua y las oportunidades de desarrollo productivo.
- Se estima en 1,5 millones de hogares (39 % del total), de los cuales el 94 % corresponde a déficit cualitativo por precariedad de materiales, habitabilidad o falta de servicios. Este déficit es más severo en ciudades en términos cualitativos y en zonas rurales en términos cuantitativos.
- De hecho, más de la mitad de la población se siente insegura en espacios urbanos, especialmente en mujeres y en ciudades como La Paz y Cochabamba (INE, 2023).
- MINE (2023). Se refiere a niños y niñas menores de cinco años con malnutrición, según índice antropométrico de talla para la edad (porcentaje por debajo de -2 desviaciones estándar).

Por otro lado, el envejecimiento poblacional ha ido modificando el perfil epidemiológico de la población sin que el sistema de salud haya desarrollado aún una respuesta adecuada. Las disparidades territoriales en el acceso a servicios de salud continúan siendo significativas, especialmente en áreas rurales y entre poblaciones indígenas. A ello se suman desafíos en la provisión y distribución de medicamentos e insumos, asociados a limitaciones de coordinación y logística entre niveles de gobierno, que afectan la continuidad y la calidad de la atención sanitaria. Aunque se han realizado esfuerzos en busca de fortalecer la gestión y formación profesional en áreas clave como salud materna, gestión hospitalaria y tecnologías sanitarias, persiste una escasez de especialistas y una concentración urbana del personal sanitario, lo que restringe la capacidad de respuesta del sistema.

En materia de seguridad alimentaria, alrededor de 2,2 millones de personas en Bolivia (aproximadamente 19 % de la población) se encontraban en situación de inseguridad alimentaria aguda en 2020, y en 2022 cerca del 21 % de la población del país sufría de inseguridad alimentaria moderada o severa. Esto destaca la necesidad de articular programas de protección social que mejoren de manera sostenible la seguridad alimentaria y nutricional de la población.

Adicionalmente, se estima que solo el 1.9 % de la población menor de cuatro años, en cinco ciudades, accede a guarderías públicas, lo que evidencia una cobertura muy reducida del cuidado infantil formal en contexto urbano y una amplia brecha entre la demanda y la oferta de servicios de cuidado temprano.

El país cuenta con una población joven que puede impulsar su productividad a través de mejoras en la calidad de educación a la que accede. Si bien en las últimas dos décadas se ha registrado una mejora sostenida en la cobertura educativa, persisten desafíos vinculados a la calidad de la educación, los bajos retornos a la inversión educativa y una limitada movilidad intergeneracional en esta materia. La tasa de abandono escolar en secundaria alcanzó el 7,8 % en 2023, especialmente en áreas rurales y comunidades indígenas, reflejando la necesidad de aplicar y fortalecer programas de retención escolar, de nivelación acelerada y de acompañamiento psicosocial.

Las evaluaciones estandarizadas⁷ más recientes evidencian que los estudiantes en el país presentan desempeños por debajo del promedio regional, con brechas que se amplían al entrelazarse factores como género, etnicidad y zona de residencia, lo que dificulta

su inserción laboral y perpetua las inequidades preexistentes. En 2023, según las evaluaciones nacionales (Ministerio de Educación de Bolivia, 2023), el 45 % de los estudiantes bolivianos de sexto de primaria no alcanzó los niveles mínimos de competencia en lectura. Esto evidencia una urgente necesidad de fortalecer las capacidades docentes y los recursos educativos. Las brechas de aprendizaje en matemáticas son significativas: solo el 29 % de los estudiantes de tercer año de secundaria alcanzó el nivel adecuado en pruebas estandarizadas nacionales (Ministerio de Educación de Bolivia, 2023).

Al mismo tiempo, persisten brechas en el acceso a tecnología educativa: solo el 38 % de las escuelas rurales cuenta con acceso regular a internet, lo que limita el aprendizaje digital y la equidad en la educación (UNICEF Bolivia, 2023).



7. De acuerdo con los resultados del Diagnóstico Nacional de Bolivia en base a las pruebas TERCE de 2019, el desempeño general de los estudiantes se concentra en un nivel muy bajo tanto en habilidades de lectura como matemática: el 39,5 % de los estudiantes de tercer grado se encuentra en el nivel 1 de desempeño (el más bajo) en lectura y el 47,2 % en matemática (TERCE, 2019), en todos los casos, con desempeños sensiblemente inferiores al promedio de la región.



La mejora de la calidad educativa y de las cifras previamente presentadas requiere reforzar e implementar acciones en la mejora de la calidad de aprendizajes y realizar una inversión sostenida en la formación inicial y continua de la planta docente boliviana. El 62 % de los docentes reportó no haber recibido capacitación continua en los últimos dos años (UNESCO, 2023), lo que impacta directamente en la calidad de la enseñanza. Estos factores, sumados al hecho de que el 54 % de las escuelas públicas carecen de infraestructura adecuada, incluyendo servicios como agua potable y saneamiento (UNICEF Bolivia, 2023), se traduce en docentes que no cuentan con condiciones óptimas para llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje y en un impacto negativo sobre el bienestar y la asistencia escolar.

La alta informalidad laboral es reflejo de los desafíos asociados a la desigualdad estructural, los bajos niveles de productividad y de institucionalidad laboral que reducen los incentivos a la formalización. Avanzar en capacitación laboral, crecimiento empresarial y formalización productiva y fortalecimiento de

la economía popular resulta fundamental para mejorar la calidad del empleo y reducir brechas de competitividad.

En 2025, la empleabilidad juvenil en Bolivia enfrentó desafíos significativos: la tasa de desempleo juvenil alcanzó el 4,7 %, superior al promedio nacional y la informalidad afectó a más del 80 % de los jóvenes. Si bien los datos del Ministerio de Educación muestran que la matrícula en institutos técnicos ha crecido en los últimos años, alcanzando a más de 120.000 estudiantes en 2024, esta cifra aún resulta insuficiente frente a la demanda de sectores estratégicos como minería, agroindustria y tecnologías de la información.

La educación dual, que combina formación en aula con prácticas en empresas, ha demostrado ser una estrategia eficaz para facilitar la transición al empleo. En países de la región, más del 70 % de los estudiantes en programas duales accede a empleo estable en menos de un año tras egresar. Para Bolivia, expandir este modelo significa no solo reducir el desempleo juvenil, sino también cerrar la brecha de habilidades técnicas que limita la competitividad nacional.

Desarrollo productivo



La transformación productiva en Bolivia requiere diversificación e inversiones que eleven la productividad y el empleo de calidad.

La contracción del sector de hidrocarburos y la débil contribución de la productividad y la innovación en el pasado subrayan la necesidad de diversificar la matriz productiva y fortalecer los incentivos a la inversión privada. Los déficits en logística, infraestructura, conectividad, capital humano y digitalización restringen la inserción en cadenas de valor dinámicas. La productividad manufacturera y agropecuaria equivale al 7,7 % de la de Estados Unidos, mientras que los sectores de menor productividad concentran el 77 % del empleo.

Sectores como la agroindustria de alto valor, acuicultura, las manufacturas especializadas, el procesamiento de minerales, el turismo sostenible y los servicios basados en conocimiento representan oportunidades concretas de diversificación. No obstante, su desarrollo requieren superar costos logísticos elevados —cerca del 18 % de las ventas— y garantizar condiciones más competitivas.

El desafío productivo vinculado al sector energético consiste en repensar el rol del gas natural al mismo tiempo que se abastece de energía limpia, de calidad y a precios competitivos a estos sectores productivos. La creciente dependencia de importaciones —90 % del diésel y 56 % de

las gasolinas consumidas— deteriora el balance comercial energético y afecta la sostenibilidad macroeconómica. A esto se suma la escasez recurrente de combustibles que interrumpe la logística productiva.

Aunque el país dispone de abundantes recursos renovables, la ausencia de señales de precio claras y de competencia limita su despegue y retrasa la transición energética. En este contexto, el impulso de la electromovilidad basada en fuentes de energía renovables puede desempeñar un rol importante para reducir la brecha entre producción y demanda de combustibles fósiles.

Orientar la seguridad energética del país es fundamental ante el agotamiento de la producción gasífera, el desbalance entre demanda interna y exportaciones, así como también la creciente importación de combustibles líquidos que profundiza aún más la crisis cambiaria y afecta la balanza de pagos. Este contexto exige un apoyo sectorial profundo en acciones que puedan, en primer lugar, restablecer la seguridad energética y, posteriormente, fomentar la sostenibilidad del sector.

La gestión eficiente del agua constituye un área estratégica para impulsar la producción, el mejoramiento de la productividad y la sostenibilidad en Bolivia. Actualmente, solo el 11 % de las tierras cultivables cuenta con riego

tecnificado y más del 60 % del recurso se pierde por fugas en múltiples sectores: suministro de agua potable, riego agrícola y otros, lo que evidencia la existencia de un amplio margen para mejorar la productividad agroindustrial y acompañar el desarrollo minero e industrial. Una gestión efectiva de la demanda, orientada a reducir pérdidas, junto con la ampliación de la infraestructura de tratamiento y reúso de efluentes, permitiría optimizar el aprovechamiento del agua, reducir la presión sobre ríos y acuíferos, y fortalecer la sostenibilidad de las actividades productivas, mitigando al mismo tiempo riesgos ambientales.

El impulso a la digitalización representa una de las principales oportunidades para potenciar la productividad, la diversificación, la eficiencia y la competitividad de Bolivia. Para ello, es necesario reducir las brechas estructurales en infraestructura y adopción tecnológica.

Bolivia ha definido recientemente su **Agenda Digital 2030** como hoja de ruta para la transformación tecnológica. Esta agenda promueve un desarrollo **inclusivo, soberano y sostenible** mediante la integración de tecnologías digitales en el gobierno, la economía, la sociedad y la gestión ambiental. La misma se articula en cinco ejes estratégicos —Infraestructura y conectividad, Tecnologías para la vida y la Madre Tierra, Gobierno digital, Economía digital, y Gobernanza digital— alineados con los ODS y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025.

La cobertura 4G se mantiene por debajo del promedio regional y el despliegue de 5G es incipiente, en un contexto de disponibilidad limitada de espectro que restringe cobertura, calidad y costos competitivos. Estas limitaciones encarecen el servicio y dificultan aplicaciones estratégicas como la trazabilidad en cadenas exportadoras, el comercio electrónico o los servicios B2B que requieren conexiones confiables.

En el ámbito empresarial, la digitalización más avanzada se concentra principalmente en grandes empresas o sectores especializados. Las micro y pequeñas empresas operan mayoritariamente con procesos

manuales o herramientas básicas, debido a restricciones en inversión, capital humano y percepción del retorno de la digitalización⁸. La incorporación de tecnologías más avanzadas —como automatización, robótica o sistemas inteligentes— es aún reducida, reflejo de una estructura productiva dominada por sectores tradicionales y con baja capacidad de absorción tecnológica. En sectores como salud y educación se pueden desarrollar estrategias para llegar a los lugares apartados con tecnologías eficientes y de amplio acceso.

A este rezago en infraestructura y adopción se suma una institucionalidad digital fragmentada: los sistemas públicos no son plenamente interoperables, numerosos trámites continúan siendo presenciales y persisten vacíos regulatorios en materia de protección de datos y ciberseguridad, lo que limita la confianza de ciudadanos y empresas. La capacidad de los gobiernos subnacionales para digitalizar servicios es desigual, ampliando brechas territoriales. Superar estas restricciones requiere acelerar la modernización del gobierno digital mediante plataformas integradas, estándares comunes, marcos regulatorios actualizados y el fortalecimiento del talento especializado.



8. Un 27 % de las empresas adquiere insumos en línea y el 15 % comercializa o distribuye mediante canales digitales. Estas cifras se sitúan por debajo del promedio regional, donde los porcentajes alcanzan el 44 % y el 20 %, respectivamente.

Integración económica



La integración nacional y regional constituye un eje clave para el impulso productivo y para proyectar a Bolivia al mundo mediante una inserción internacional más dinámica.

Bolivia destaca por tener un significativo comercio intrarregional, con una participación del 35 % en exportaciones y 48 % en importaciones. La red de conectividad se estructura en corredores estratégicos dominados por el eje Este-Oeste, que articula los principales polos productivos y canaliza la mayor parte de los flujos hacia Perú, Brasil y la Hidrovía Paraná-Paraguay, facilitando el acceso a mercados globales. A este eje se suman rutas en consolidación como el Corredor Sur hacia Argentina y la salida Atlántica a través de Puerto Busch-Canal Tamengo, clave para ampliar la competitividad exportadora del país.

No obstante, el norte del país carece de corredores consolidados y depende fuertemente del tráfico vinculado al Corredor Central, lo que limita su potencial de integración. En este escenario, avanzar hacia una conectividad más equilibrada implica garantizar accesos competitivos a puertos del Atlántico y el Pacífico, ampliar el comercio con el Noroeste argentino, habilitar enlaces con los estados del oeste brasileño y la cuenca amazónica, y consolidar los corredores transversales que proyecten a Bolivia como plataforma bioceánica

capaz de conectar producción, servicios y turismo con el resto del mundo.

El fortalecimiento del transporte y la logística representa una oportunidad clave para Bolivia para mejorar su competitividad e integración regional y para atraer inversiones, promover el turismo e insertarse en nuevas cadenas globales de valor. El sistema

mantiene una alta dependencia del transporte carretero y, pese a los esfuerzos de inversión de los últimos años, persisten importantes brechas en infraestructura vial: solo el 16 % de la red nacional está pavimentada⁹, la densidad vial es la más baja de la región y la accesibilidad rural continúa siendo limitada. La falta de dragado en hidrovías, la fragmentación ferroviaria y la insuficiencia de infraestructura y conectividad aérea elevan los costos logísticos y restan competitividad.

A ello se suma la necesidad de fortalecer la conectividad digital, indispensable para la instauración de aduanas inteligentes, el comercio electrónico y la promoción turística internacional. En materia turística, existe un gran potencial no solo por su belleza y diversidad de paisajista y biológica, sino también por la conservación de sitios históricos tanto de civilizaciones indígenas como coloniales (conserva misiones jesuíticas intactas) y por su gran cultura viva.

Estas brechas y rezagos se ven reflejados en los indicadores internacionales: Bolivia ocupa el puesto 115 de 139 en el Índice de Desempeño Logístico 2023 y se ubica 11 % por debajo del promedio latinoamericano en el Índice de Integración de Infraestructura y Conectividad. La mayor parte de los flujos comerciales se concentra en pocos nodos donde persisten cuellos de botella operativos e institucionales. Mejorar la calidad de accesos viales, la gestión urbana, la resiliencia climática y la digitalización aduanera resulta clave para agilizar el comercio exterior y fortalecer la competitividad turística y logística del país.

El sistema eléctrico boliviano opera con una alta sobrecapacidad térmica y una interconexión regional todavía limitada, lo que reduce las posibilidades de exportar excedentes renovables y de aprovechar plenamente el potencial hidroeléctrico y solar del país. En **materia de gas, resulta prioritario impulsar la exploración para recuperar el potencial de producción que tenía el país en el pasado.** La extensa red de gasoductos que históricamente conectó a Bolivia con Brasil y Argentina —y que hoy facilita, además, el tránsito de gas argentino hacia Brasil— mantiene al país como un nodo logístico central en el Cono Sur que podría ser mejor aprovechado incrementando la producción local. Sin embargo, para que esto sea viable, es necesario modernizar y expandir gasoductos

bidireccionales así como también estaciones de compresión y medición. La ausencia de marcos regulatorios más estables restringe su competitividad y la capacidad de consolidar su rol como articulador energético regional.

La transición energética representa una oportunidad estratégica para Bolivia en el contexto de los cambios estructurales del sistema energético global. El desarrollo de energías más limpias abre al país la posibilidad de incursionar en nuevas cadenas de valor, particularmente en el desarrollo del hidrógeno verde y de minerales críticos. En este marco, la región concentra más del 50 % de las reservas mundiales de litio, y Bolivia cuenta con una oportunidad relevante para avanzar hacia una estrategia de mayor valor agregado que evite la exportación del recurso como mera materia prima. La movilización de inversión privada resulta clave para cerrar la brecha entre el potencial de reservas y los niveles efectivos de producción.

De manera complementaria, **el país cuenta con un gran potencial de energías renovables convencionales y no convencionales que permiten pensar su transición energética de una manera segura, sostenible y bien planificada.** En este proceso, el gas natural puede desempeñar un rol energético de transición, reduciendo de manera programada el peso de las importaciones de combustibles con acciones y políticas articuladas de oferta y demanda de energía.



9. De acuerdo con el INE (2024), la Red Vial Fundamental alcanza los 17.134 kilómetros, de los cuales un 59 % está pavimentado. A ello se suman 36.577 kilómetros de red departamental y aproximadamente 150.000 kilómetros de red municipal.

La agenda de transición energética se intersecta con desafíos ambientales y climáticos de creciente relevancia. Bolivia combina una elevada vulnerabilidad climática con capacidades de adaptación aún incipientes, lo que impacta directamente en sus territorios, servicios e infraestructura. En este contexto, la gestión del agua emerge como un desafío crítico para la productividad, las ciudades y la industria, en un escenario marcado por la mayor variabilidad climática, la pérdida de superficie natural y una mayor incidencia de eventos extremos.

La inversión pública no es suficiente. En 2016 el país destinó más del 8 % del PIB en infraestructura económica, logrando avances significativos en materia de

carreteras y servicios sociales. No obstante, la caída de los ingresos fiscales redujo el espacio para nuevas inversiones, afectando tanto al nivel central como a los gobiernos subnacionales, cuya alta dependencia de regalías e impuestos hidrocarburíferos limita su margen de financiamiento. La participación privada continúa siendo marginal, en parte por la ausencia de un marco nacional de instrumentos modernos que permitan ampliar la participación privada en inversiones en sectores estratégicos. Fortalecer la ejecución presupuestaria y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos constituye un paso clave para diversificar fuentes de financiamiento y potenciar la capacidad del país para transformar su matriz productiva.

Al mismo tiempo, el capital natural del país puede transformarse en una ventaja competitiva si se fortalecen las capacidades de gestión y regulación ambiental. Los desafíos ambientales asociados a la transición energética y digital —incluida la gestión de residuos y pasivos ambientales— requieren marcos institucionales más robustos e infraestructura habilitante. En este sentido, el elevado potencial hidroenergético, la disponibilidad de energías renovables no convencionales y la riqueza natural de Bolivia ofrecen una base sólida para avanzar hacia un modelo de desarrollo más resiliente, siempre que se refuercen la planificación territorial, la regulación ambiental y la inversión en infraestructura sostenible.

En suma, Bolivia requiere una agenda integrada que combine estabilidad macroeconómica, transformación productiva, bienestar social, sostenibilidad ambiental, seguridad ciudadana, digitalización y un Estado moderno y transparente con capacidad de ejecutar eficientemente sus recursos. Avanzar en estos frentes permitirá

fortalecer las bases fiscales, diversificar la economía, cerrar brechas territoriales y sociales, impulsar la transición energética y la gestión sostenible del agua, mejorar la convivencia y aprovechar plenamente la inserción internacional de Bolivia a través de la integración logística, digital y regional.

La gestión del agua emerge como un desafío crítico para la productividad, las ciudades y la industria, en un escenario marcado por la mayor variabilidad climática, la pérdida de superficie natural y una mayor incidencia de eventos extremos.





3 ACCIÓN CAF EN BOLIVIA

Desde su fundación, CAF ha acompañado a Bolivia, consolidándose como uno de sus principales socios estratégicos en el financiamiento del desarrollo. A lo largo de más de cinco décadas, ha canalizado recursos destinados a proyectos de infraestructura vial y de integración regional, de seguridad hídrica (agua, saneamiento, riego, gestión de sequías, control de inundaciones, drenaje pluvial), educación, salud, resiliencia climática y desarrollo, contribuyendo de manera decisiva a mejorar la competitividad y la calidad de vida de la población.

En el período 2021-2025, CAF acompañó al país con un monto de aprobaciones de USD 2.745 millones¹⁰ con el objetivo de contribuir a la estabilidad macroeconómica, la productividad agregada y sectorial, el acceso equitativo a servicios básicos y la conservación del capital natural desde un enfoque de resiliencia climática.

El compromiso de CAF con la estabilidad macroeconómica se manifestó de manera decisiva en los momentos más críticos. Tras los efectos prolongados de la pandemia de la COVID-19 y las fuertes presiones fiscales, Bolivia debió recurrir a instrumentos contracíclicos para reactivar el dinamismo de la inversión pública. En este contexto, CAF respondió mediante la provisión de recursos de libre disponibilidad y rápido desembolso por USD 930 millones, contribuyendo a mitigar los efectos de la pandemia en los sectores económicos, financieros y sociales.

Además, en 2022 se aprobó un crédito de riesgo soberano a largo plazo de USD 400 millones bajo la modalidad de Préstamo Basado en Políticas Públicas (PBL), destinado a respaldar la gestión fiscal del

Tesoro General de la Nación (TGN). Este instrumento permitió garantizar la disponibilidad y ejecución oportuna de recursos públicos, reforzando la gestión presupuestaria territorial y asegurando la continuidad de los programas y proyectos de inversión pública, considerados esenciales para la reactivación de las economías regionales. CAF ha reforzado este apoyo a través de cooperaciones técnicas orientadas a fortalecer la planificación y la gestión del desarrollo, tales como el apoyo al programa de capacitación y difusión del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025, la asistencia en los procesos de seguimiento y evaluación de medio término del PDES, y el programa de capacitación en gestión de la inversión pública, los cuales consolidan capacidades institucionales y aseguran una mayor efectividad en la implementación de las políticas públicas. Asimismo, se incorporaron componentes orientados a la resiliencia climática y al desarrollo sostenible, reforzando un enfoque de crecimiento inclusivo y ambientalmente responsable.



De manera complementaria, en 2023 se activó la Línea de Crédito Contingente no Comprometida de Liquidez por un monto de USD 400 millones, destinada a fortalecer la capacidad de respuesta del país frente a escenarios de tensión macroeconómica. Este instrumento permitió proporcionar liquidez en un contexto de mayor riesgo país y restricciones de acceso a mercados financieros internacionales, así como sostener la inversión pública territorial en un entorno de disminución de reservas internacionales.

En materia de productividad e infraestructura vial, CAF se ha consolidado como el socio estratégico más relevante de Bolivia con la aprobación de proyectos por un valor aproximado de USD 1.000 millones. Estas inversiones trascienden la función básica de conectividad y constituyen verdaderos catalizadores de productividad regional, competitividad logística y dinamización del turismo. La ejecución de obras en corredores estratégicos —entre ellas, Escoma-Charazani en el departamento de La Paz, el tramo uno de la Doble Vía Oruro-Challapata en Oruro, los tres primeros tramos de la carretera Uyuni-Hito LX, así como el Programa de Puentes

para el Desarrollo y múltiples intervenciones que fortalecieron la Y de Integración— responde a una visión integral de conectividad nacional y regional que articula territorios históricamente rezagados con los principales ejes de desarrollo económico y social.

Estas iniciativas reducen sustancialmente los costos logísticos, fortalecen la integración comercial e impulsan la articulación productiva en áreas de baja densidad económica, generando un efecto multiplicador en la competitividad territorial. A ello se suma la implementación del Programa de Preinversión PROMULPRE II, orientado a robustecer la capacidad del país para estructurar carteras estratégicas de proyectos de inversión pública. La experiencia comparada en América Latina confirma que los países que logran anticipar y preparar con rigurosidad sus estudios de pre-inversión alcanzan niveles de ejecución significativamente más eficientes. En este sentido, la apuesta de CAF por apoyar de manera sistemática este tipo de procesos no solo tiene un valor operativo inmediato, sino que constituye una inversión estratégica de largo plazo para garantizar una planificación más

sólida, sostenible y alineada con las prioridades nacionales de desarrollo.

En turismo sostenible, CAF ha apoyado inversiones en infraestructura en el Salar de Uyuni y las Lagunas de Colores, así como cooperaciones técnicas para la promoción y estructuración de oportunidades de inversión, incluyendo la elaboración de una Guía de Inversiones Turísticas que se encuentra en curso.

El acceso a servicios básicos constituye una de las áreas donde la acción de CAF ha adquirido mayor visibilidad e impacto. En materia de seguridad hídrica, en 2024 se aprobaron USD 240 millones destinados al Programa de Presas Resilientes, que constituye la segunda etapa de un Programa ya existente, orientado a fortalecer el almacenamiento multipropósito de agua para consumo humano, riego y usos productivos, contribuyendo a la adaptación climática, la seguridad alimentaria y la cohesión territorial. Se suman proyectos como la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cabeza de Toro en Tarija, así como operaciones vinculadas a los programas Mi Agua, Mi Riego y PROASRED, y la Facilidad de Preinversión CAF-PPSA para estudios en seguridad hídrica y gestión de residuos sólidos.

En el período 2021-2025, CAF acompañó al país con un monto de aprobaciones de USD 2.745 millones con el objetivo de contribuir a la estabilidad macroeconómica, la productividad agregada y sectorial, el acceso equitativo a servicios básicos y la conservación del capital natural.

10. Cifra de aprobaciones al 30 de septiembre de 2025.

CAF también ha incorporado enfoques innovadores como el programa Creciendo con Agua Segura, que incorpora elementos nutricionales, y los Fondos de Agua de Santa Cruz y Tarija, que integran la gestión comunitaria con la protección y aprovechamiento sostenible de cuencas y el fortalecimiento institucional en torno a ellas.

CAF ha venido trabajando para contribuir a la **mejora de las condiciones de salud y el desarrollo de la niñez boliviana**. Esta intervención, financiada con fondos de cooperación técnica, busca reducir las brechas en la atención primaria y garantizar que los servicios de salud lleguen a las poblaciones más vulnerables, fortaleciendo la equidad territorial. Como resultado de esto, se ha diseñado una propuesta de definición y fortalecimiento de las redes integrales e integradas de salud con un enfoque en salud materno infantil.

En el sector educativo, CAF impulsó acciones estratégicas orientadas a la innovación tecnológica y la transformación pedagógica en el Sistema

Educativo Plurinacional. Entre las iniciativas más relevantes se encuentra el “Diagnóstico y Hoja de Ruta para la mejora sostenida del uso de la tecnología en la educación”, que tiene como objetivo identificar las principales brechas y oportunidades en materia de infraestructura digital, capacidades docentes y estrategias pedagógicas, a fin de orientar inversiones y políticas públicas hacia una educación más inclusiva y moderna. De igual manera, CAF apoyó al Ministerio de Educación de Bolivia con la generación de conocimiento sobre programas regionales exitosos de mejora de aprendizajes mediante plataformas interactivas, con el objetivo de orientar decisiones de política pública basadas en evidencia.

El apoyo a la conservación del capital natural y la resiliencia al cambio climático se ha materializado de manera concreta en la transición energética. La aprobación del financiamiento para la Planta Solar Chichas, con una capacidad instalada de 120 MW, constituye un hito en la matriz energética boliviana, al convertirse en la instalación fotovoltaica más grande del país. Esta inversión

no solo sustituye generación termoeléctrica por energía limpia, sino que además incorpora estándares de eficiencia que pueden ser replicados en futuros proyectos. El hecho de que en 2024 el 74 % de las aprobaciones de CAF en Bolivia hayan correspondido a financiamiento verde refleja tanto el compromiso institucional con la sostenibilidad como la voluntad de acompañar al país en la consolidación de un modelo de desarrollo en el que las inversiones trascienden la atención de necesidades inmediatas y se articulan con los compromisos globales de sostenibilidad y resiliencia climática.

CAF se ha consolidado como uno de los principales actores en el país en la movilización de recursos de fondos verdes globales (GEF, GCF), con varios proyectos orientados al fortalecimiento de la gestión de cuencas transnacionales, mejoras en la conservación y uso sostenible de ecosistemas estratégicos vulnerables y en la promoción de mercados de carbono. De igual manera, CAF ha apoyado a Bolivia en la gestión de emergencias derivadas de eventos climáticos adversos.



En el **sector no soberano**, la acción de CAF se orientó a fortalecer la institucionalidad financiera en un entorno desafiante, caracterizado por restricciones en plazos, monedas y condiciones de mercado. Aun en este contexto, la institución sostuvo una agenda activa en finanzas sostenibles, inclusión social y reactivación económica. Un hito particularmente relevante fue la **primera emisión de bonos verdes sostenibles en el país del Banco de Desarrollo Productivo (BDP)**, que simboliza el compromiso de Bolivia con los mecanismos regionales de adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como con la conservación del capital natural. Esta iniciativa, respaldada técnica y estratégicamente por CAF, no solo consolidó instrumentos financieros alineados con criterios ambientales y sociales, sino que también abrió un horizonte prometedor para

el desarrollo del mercado de capitales boliviano y estableció un precedente para futuras emisiones de bonos temáticos.

De igual manera, destacan operaciones de profundo impacto social y productivo, como los préstamos otorgados PROMUJER IFD y FIE, destinados a **financiar micro y pequeñas empresas del sector productivo, muchas de ellas lideradas por mujeres**. Estas intervenciones representan un aporte técnico y financiero relevante en materia de inclusión financiera, equidad de género y acceso a oportunidades productivas. La participación patrimonial de CAF en el BDP-SAM refuerza, además, la capacidad del sistema financiero para canalizar crédito productivo en moneda local, reduciendo la vulnerabilidad frente a choques externos.

La primera emisión de bonos verdes sostenibles en el país del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) simboliza el compromiso de Bolivia con los mecanismos regionales de adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como con la conservación del capital natural.



4 PRIORIDADES DEL PLAN DE GOBIERNO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

El nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz, elegido para gobernar Bolivia durante el periodo de 2026-2030, ha iniciado su proceso de planificación tanto del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social

(PDES) para el nuevo quinquenio (2026-2030) como del Plan General de Desarrollo Económico (PGDES) del nuevo decenio (2026 y 2035). Esta visión estratégica plantea posicionar a Bolivia, tal como

lo ha expresado en sus propias palabras, “como referente regional y mundial; con bolivianas y bolivianos preparados para el mundo; a partir de un Estado facilitador y un modelo económico para todos”.



El plan se estructura en siete ejes estratégicos:

- **Bolivia, economía para la gente.** Busca promover la generación de empleo, reducir la informalidad y consolidar un modelo económico más equilibrado entre sector público y privado. Incluye una nueva política de estabilización monetaria, el impulso al emprendimiento, el fortalecimiento productivo y una gestión estratégica de recursos naturales y energéticos (hidrocarburos, minería, litio y biocombustibles).
- **Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia.** Plantea profundizar la integración regional y global, implementar una política de cielos abiertos, potenciar el turismo, promover la adopción tecnológica y fortalecer el comercio exterior y la atracción de inversiones.
- **Bolivia 50/50.** Orientado a profundizar la descentralización, fortalecer las autonomías y promover el desarrollo regional con una gobernanza coordinada entre niveles de gobierno.

- **Bolivia moderna y eficiente.** Busca superar el denominado “Estado tranca” mediante la desburocratización, la transformación digital del sector público, la seguridad jurídica, el respeto a la propiedad privada y la habilitación del uso de biotecnologías.
- **Bolivia transparente.** Enfocado en la lucha contra la corrupción, la reforma integral del sistema de justicia, el fortalecimiento de la transparencia mediante tecnologías digitales y el combate al contrabando y al narcotráfico.
- **Bolivia, bienestar para todos.** Prioriza el fortalecimiento de salud y educación, políticas de vivienda y servicios básicos, inclusión social y seguridad ciudadana.
- **Bolivia verde y sustentable.** Contempla la protección ambiental, el acceso a financiamiento climático, la gestión de recursos hídricos y residuos sólidos, la transición energética y la gestión de riesgos frente al cambio climático.



En síntesis, el Plan de gobierno para el periodo 2026-2030 busca promover un modelo económico más inclusivo y moderno orientado a la estabilización macroeconómica, la mejora de la producción y la generación

de empleo. Simultáneamente, busca proyectarse al resto del mundo, fortaleciendo la integración sudamericana mediante el comercio, las inversiones y el turismo, apoyar la descentralización y el desarrollo desde y de las regiones, modernizar

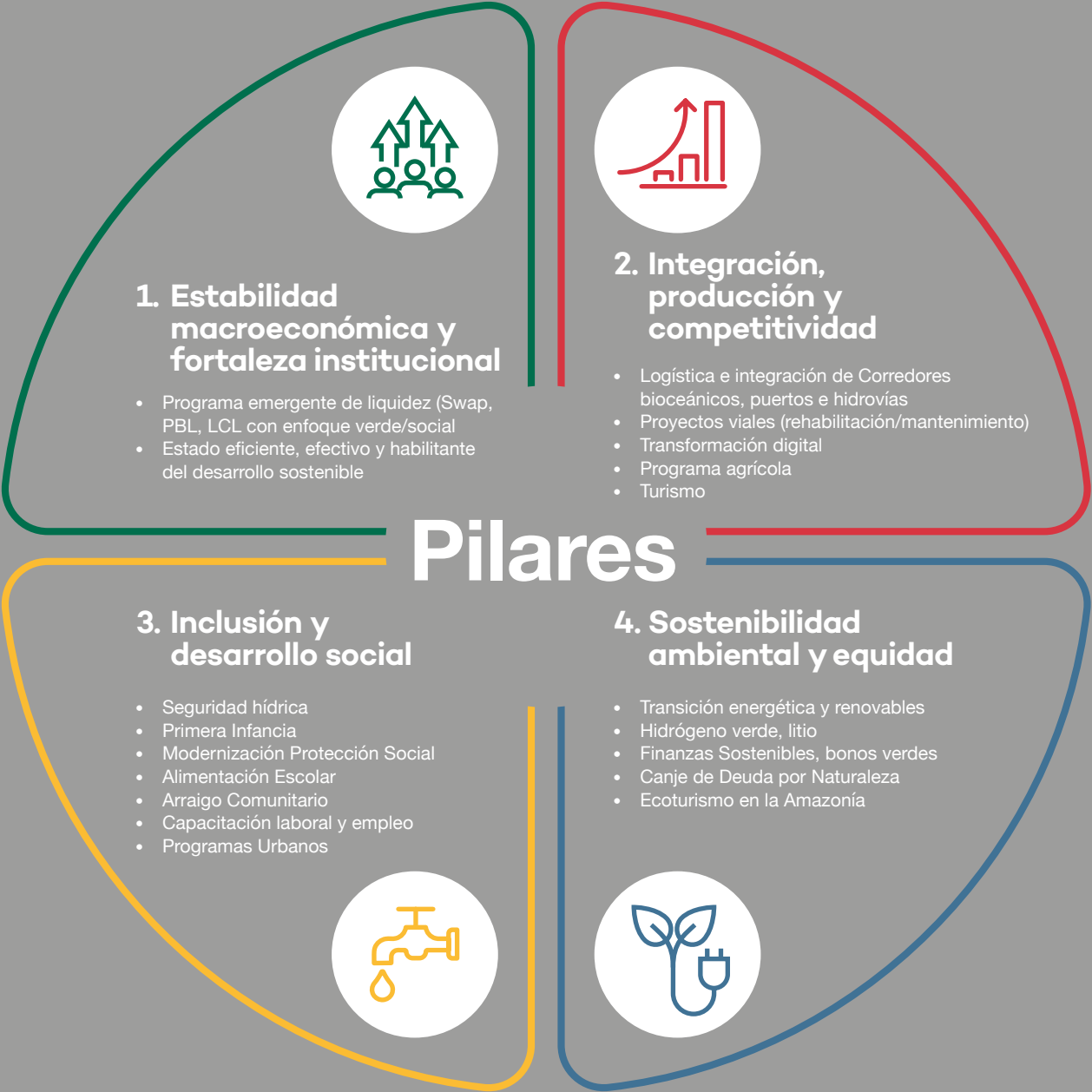
y hacer más eficiente y transparente al Estado, impulsar el desarrollo y la inclusión social, garantizar la seguridad ciudadano, y, finalmente, promover un desarrollo sostenible y una Bolivia verde.



5 ESTRATEGIA PAÍS



En el marco de un Estado más eficiente, efectivo y habilitante del desarrollo, CAF propone la Estrategia País 2025-2030 para Bolivia, estructurada en cuatro pilares. Estos se adaptan a las prioridades que ha establecido el gobierno y se vinculan a los ejes propuestos por este, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.



Esta Estrategia contempla aprobaciones por un monto de hasta USD 3.100 millones a través de diferentes mecanismos de acompañamiento al país. En el corto plazo, se enfocará en

acciones que permitan a Bolivia superar las actuales presiones de liquidez y restricciones presupuestarias. En el mediano plazo, priorizará iniciativas que le permitan retomar una senda de

crecimiento sostenido, basado en proyectos de inversión pública, desarrollo productivo y de servicios sostenible y fortalecimiento de capacidades humanas e institucionales.



Estabilidad macroeconómica y fortalecimiento institucional

Este pilar contribuye a los ejes de gobierno “Bolivia, economía para la gente”, “Bolivia moderna y eficiente” y “Bolivia transparente”. La estabilización macroeconómica constituye una condición necesaria para proteger el bienestar de la población, particularmente de los hogares más vulnerables, cuya economía cotidiana es la más expuesta a los efectos de la inflación, la volatilidad cambiaria y la incertidumbre macroeconómica.

En este marco, el primer pilar propuesto por CAF prioriza el apoyo a la estabilización de la economía boliviana como base para un crecimiento inclusivo y sostenible. Los desequilibrios fiscales, la reducción de reservas internacionales y las presiones inflacionarias han limitado el margen de acción de la política económica y han comenzado a trasladarse a la economía real. Por ello, se propone una estrategia integral de apoyo que combine instrumentos financieros, cooperación técnica y gestión de conocimiento, alineada con las medidas estructurales impulsadas por el Gobierno.

En este marco, y frente a la necesidad de alcanzar una estabilidad macroeconómica y una liquidez inmediata, se plantea un programa emergente de liquidez de corto plazo, orientado a atender requerimientos urgentes de financiamiento. Estos recursos,

alineados en el marco del diálogo del Gobierno boliviano con la comunidad financiera internacional, permitirían atender necesidades inmediatas de financiamiento externo, reducir presiones cambiarias e inflacionarias y sentar las bases para una agenda de desarrollo productivo y sostenibilidad fiscal de mediano plazo.

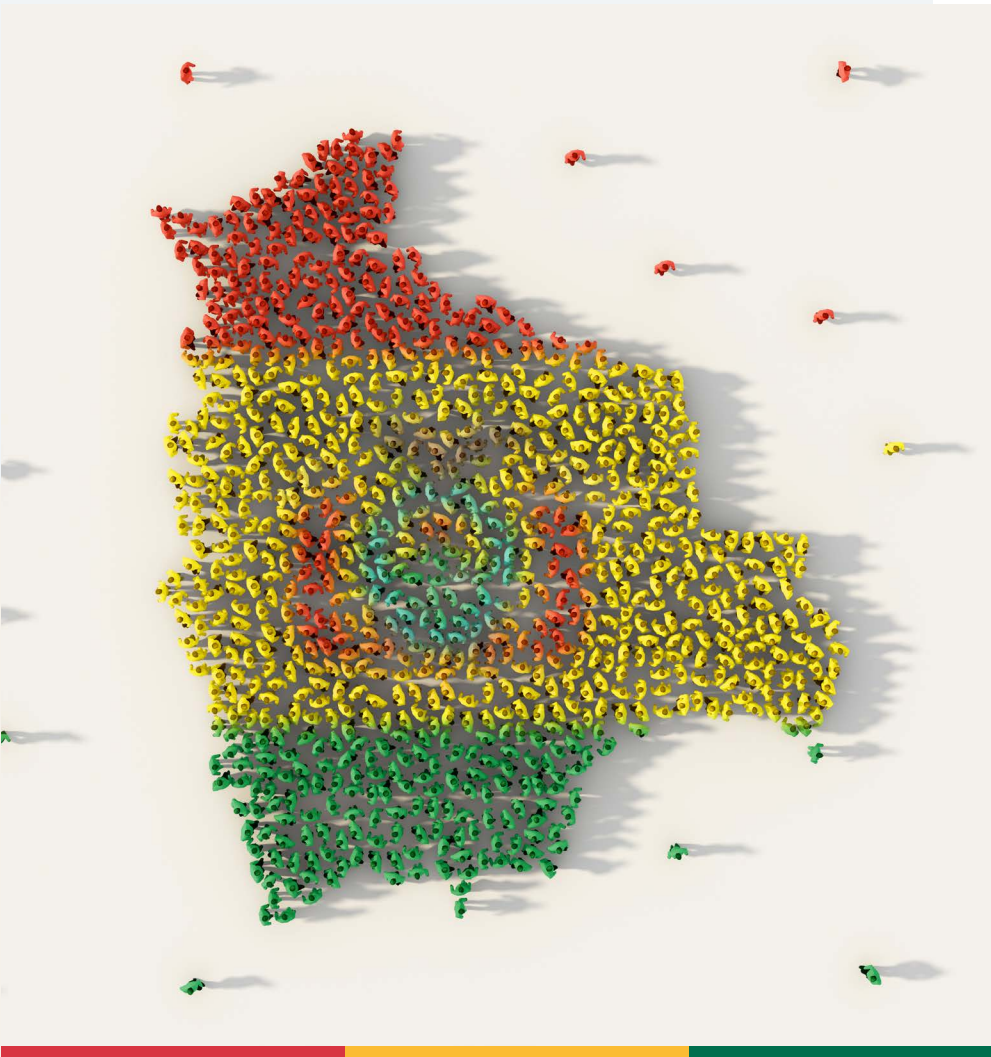
Este apoyo estará acompañado de **cooperación técnica dirigida a fortalecer las capacidades de las instituciones** responsables de los asuntos económicos, los temas sectoriales y la planificación del desarrollo. En particular, **CAF contribuirá al proceso de diseño y socialización del PDES 2026-2030**, al fortalecimiento del sistema de monitoreo y evaluación de metas y a la mejora de la gestión de la inversión pública, con el objetivo de optimizar el aprovechamiento de las diferentes

fuentes de financiamiento y otras necesidades de fortalecimiento institucional que requiera la institución de planificación e instituciones relacionadas.

Otro componente importante de **asistencia técnica** estará dirigido a mejorar las capacidades de toma de decisión de las autoridades económicas, fortalecer marcos regulatorios y desarrollar instrumentos técnicos de análisis y prospectiva que respalden la formulación y gestión de políticas públicas. **Adicionalmente, el apoyo técnico buscará fortalecer la ejecución presupuestaria** y mejorar la eficiencia en la asignación y el uso de los recursos y de la inversión pública, potenciando las capacidades humanas y productivas así como también los bienes públicos y el patrimonio físico del país.

En esta misma línea, y para potenciar la eficiencia y efectividad del Estado, CAF acompañará el fortalecimiento institucional de los principales organismos ejecutores del país mediante recursos no reembolsables y la orientación en el uso estratégico de componentes de apoyo técnico y administrativo de operaciones de crédito en ejecución. Este último eje requiere de acciones específicas y estratégicas relativas a la transformación digital del Estado tales como:

- **Transformación digital** para una interoperabilidad plena y obligatoria entre los sistemas (SNIP, SIGEP y SICOES), mediante identificadores únicos de proyectos y contratos y el intercambio automático de información entre planificación, contratación y pagos.
- En materia de transparencia e integridad, **el énfasis estratégico no debe estar solo en publicar información, sino en abrir los flujos financieros reales del Estado a través de un programa de datos abiertos con énfasis fiscal**. La digitalización de procesos para llegar a un esquema automatizado de pagos, alimentado directamente desde el SIGEP y vinculado a contratos del SICOES, tendría un efecto disuasivo significativo sobre fenómenos de corrupción, colusión y sobreprecios, generando ahorros fiscales recurrentes. Complementariamente, la evolución del SICOES hacia un sistema transaccional mínimo —que registre modificaciones contractuales y valide pagos— permitiría reducir desviaciones presupuestarias *ex post*.



En conjunto, estas reformas apuntan a un cambio de paradigma: **pasar de sistemas centrados en el cumplimiento formal de procedimientos a una estructura digital orientada a resultados fiscales y macroeconómicos**. Mejorar la interoperabilidad, la transparencia efectiva y el control ex ante del gasto público permitiría reducir presiones fiscales sin recurrir a recortes abruptos ni aumentos impositivos, fortaleciendo al mismo tiempo la credibilidad del Estado y el impacto económico de la inversión pública.

De esta manera, este primer pilar no solo contribuye a la estabilización

macroeconómica, sino también al fortalecimiento institucional, la modernización administrativa y la transparencia de la gestión pública, en línea con las prioridades del Gobierno.

En el mediano plazo, se prevé implementar los siguientes pilares tendientes a profundizar la integración nacional y regional, impulsar la producción y la competitividad, dar continuidad a los avances en bienestar e inclusión social, y promover la sostenibilidad ambiental del desarrollo y la equidad en sus distintas dimensiones.



Integración, producción y competitividad

En el segundo pilar, CAF busca profundizar la integración nacional y regional e impulsar la producción y la competitividad, reconociendo que Bolivia enfrenta el reto estratégico de convertir su ubicación geográfica en un activo para la integración y la competitividad. Este pilar contribuye a cuatro ejes de desarrollo del plan de gobierno:

1
Bolivia, economía para la gente

3
Bolivia 50/50

2
Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia

4
Bolivia moderna y eficiente

Bolivia cuenta con una trayectoria destacada en inversión en infraestructura; sin embargo, requiere modernizar sus marcos regulatorios e institucionales para sostener el ritmo de desarrollo. En este sentido, CAF movilizará **asistencia técnica y los proyectos necesarios para apoyar dicha modernización y para fortalecer la ejecución presupuestaria y mejorar la eficiencia** en la asignación y el uso de recursos públicos destinados al desarrollo productivo y a la infraestructura económica.

Otro componente clave consiste en **trabajar de manera conjunta con el Gobierno en la definición de una hoja de ruta para**

rentabilizar socialmente la infraestructura, potenciar las capacidades logísticas del país y promover la integración nacional y regional. Esta hoja de ruta priorizará establecer inversiones destinadas a asegurar la funcionalidad y fluidez de los corredores logísticos estratégicos, particularmente los de acceso a los puertos del Pacífico como vía estratégica hacia los mercados internacionales; impulsar el desarrollo de los corredores bioceánicos, aeropuertos y redes ferroviarias que consolidan a Bolivia como un puente natural entre el Atlántico y el Pacífico; y reforzar la conectividad a través de las hidro vías, garantizando condiciones de acceso soberano, continuo, seguro y ambientalmente sostenible.

Adicionalmente, priorizar proyectos viales enfocados en la rehabilitación, obras complementarias para proyectos en ejecución, el mantenimiento y las inversiones estratégicas en la Red Vial Fundamental resulta importante a fin de asegurar la preservación de la infraestructura crítica, optimizar la conectividad nacional y regional y consolidar a Bolivia como un nodo competitivo en los corredores de integración.

Asimismo, la inversión en vías camineras productivas de alcance subnacional será fundamental para potenciar el primer eslabón de la cadena productiva nacional. Estas intervenciones, mediante la creación de “infraestructura habilitante”, generarán un alto impacto económico con una inversión eficiente, sentando las bases de conectividad necesarias para la viabilidad de futuros proyectos de industrialización.

La Estrategia priorizará la Gestión Integral de la Seguridad Vial como un componente esencial de la calidad de la infraestructura. Se promoverán inversiones destinadas a la corrección de puntos críticos, la auditoría técnica de proyectos desde su fase de diseño, la capacitación y la implementación de sistemas inteligentes de transporte (ITS). El objetivo es desvincular el crecimiento del flujo vehicular del incremento en la siniestralidad, garantizando que los corredores logísticos bolivianos no solo sean motores de competitividad económica, sino también entornos resilientes que minimicen las externalidades sociales y protejan la vida de los usuarios más vulnerables.

Se priorizará la actualización de los marcos normativos vigentes con el fin de implementar un mecanismo formal de ajuste de precios. Ante la imposibilidad técnica de su aplicación generalizada, se definirán

criterios técnicos y legales que fundamenten la revisión de costos en los contratos. El objetivo central es blindar los proyectos contra la volatilidad económica y garantizar la sostenibilidad financiera de las inversiones en el territorio nacional.

El país también debe superar las brechas en conectividad digital, servicios estatales y productividad empresarial, lo que representa una oportunidad para impulsar la transformación digital. Las inversiones deberán enfocarse en conectividad e inclusión (última milla rural, enlaces internacionales, redes comunitarias, educación y edificios públicos), en el desarrollo de un Estado Digital (portal único de trámites, identidad y billetera digital, pagos electrónicos, servicios ciudadanos, gestión fiscal, ciberseguridad y continuidad operativa), y en el fortalecimiento de los sectores productivos, principalmente micro y pequeñas empresas.





Proyectos sugeridos en agenda digital y servicios al ciudadano

1. Infraestructura y conectividad:

priorizar inversiones en conectividad universal, cofinanciando la expansión de fibra óptica y redes 4G/5G en zonas periurbanas y rurales (por ejemplo, segunda fase de PRONTIS para comunidades de menos de 50 habitantes). Impulsar el programa “Internet para Todos” y brindar asistencia técnica en la licitación 5G. Aprovechar la apertura satelital LEO negociando condiciones favorables y financiando terminales para escuelas, postas y telecentros rurales. Fortalecer capacidades del regulador (ATT) y de ENTEL, incluyendo un plan de negocios robusto para el satélite Túpac Katari.

2. Transformación digital del Estado:

apoyar la implementación acelerada de la Agenda Digital 2030 con asistencia técnica para fortalecer institucionalidad. CAF puede respaldar la creación de un Observatorio de Transformación Digital, financiar una plataforma de interoperabilidad robusta y promover la digitalización integral de trámites prioritarios (identidad, registro civil, permisos), tomando como referencia experiencias regionales.

3. Servicios al ciudadano y gobierno digital:

identificar y digitalizar trámites de alto impacto (certificados personales, pago de impuestos, beneficios sociales) con desarrollo end-to-end que incluya reingeniería de procesos, simplificación normativa y campañas de adopción. Ampliar la Plataforma de Interoperabilidad a municipios y gobiernos subnacionales. Acompañar implementación del Plan de Datos Abiertos (DS 5340/2023). Asesorar en el marco normativo de gobierno digital, impulsando aprobación de la Ley de Justicia Digital y actualizaciones para notificaciones electrónicas y validez legal de documentos digitales.

4. Institucionalidad y gobernanza:

asesorar en la elaboración de una Ley de Transformación Digital que eleve a rango legal a AGETIC y defina roles institucionales (oficiales digitales por ministerio). Promover un Comité Nacional de Ciberseguridad multi-actor y una estrategia nacional. Contribuir a establecer marco de gobernanza de datos abiertos y compartidos. Financiar un Consejo Consultivo de Transformación Digital con participación de los sectores académicos, privados y la sociedad civil. Desarrollar un “paquete legislativo digital”, incluyendo una Ley de Gobierno Digital, ajustes al Código Penal para delitos informáticos, y normativas sectoriales (telemedicina, educación en línea, identidad digital). Acompañar la elaboración de guías éticas y regulatorias para IA, basadas en las recomendaciones de UNESCO.

5. Ciberseguridad:

apoyar la formulación participativa de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, designando una Autoridad Nacional, priorizando sectores críticos y estableciendo un plan quinquenal. Cofinanciar un Centro Nacional de Operaciones de Seguridad (SOC) con monitoreo 24/7. Patrocinar una Academia Nacional de Ciberseguridad en alianza con universidades. Asistir en la elaboración de un anteproyecto de Ley de Ciberseguridad y Protección de Infraestructuras Críticas. Organizar simulacros de ciberataques y campañas de higiene cibernética.

6. Talento y habilidades digitales:

apoyar la integración de habilidades digitales en educación formal, incorporando contenidos de alfabetización digital desde la educación primaria, formación docente en TIC e infraestructura acorde (laboratorios, conectividad escuelas rurales). Impulsar el proyecto emblemático “Escuela Digital Bolivia”. Respaldar programas de capacitación laboral (coding bootcamps y certificaciones en oficios digitales) para jóvenes y mujeres. Patrocinar la ampliación de RobóTICas a escala nacional. Crear Centro de Innovación y Formación en IA y Ciencia de Datos en universidades públicas. Impulsar programas de alfabetización digital comunitaria en telecentros para comunidades rurales e indígenas.

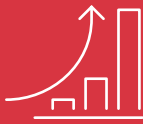
Proyectos sugeridos en el campo sectorial



Educación digital: el rezago del sistema quedó evidenciado durante la pandemia. Aunque la Agenda Digital prioriza la educación virtual, persisten brechas estructurales: infraestructura escolar limitada, un currículo que no incorpora formalmente competencias TIC y docentes sin formación digital suficiente, lo que amplía las desigualdades territoriales y socioeconómicas. En esta dirección, se requiere impulsar programas de conectividad escolar (satelital/radioenlace), el desarrollo de una **Plataforma Nacional de Educación Virtual multilingüe**, la capacitación docente continua y el fortalecimiento de las **EduTech** locales mediante concursos y alianzas con startups.

Salud digital (Telemedicina): existen avances iniciales, como proyectos piloto de telemedicina vía Túpac Katari y la aplicación MedBol; sin embargo, el sistema continúa siendo mayormente analógico. Las brechas incluyen infraestructura hospitalaria insuficiente, falta de estándares interoperables y ausencia de un marco regulatorio para la teleconsulta. En esta dirección, se requiere impulsar un **Plan Nacional de Salud Digital** con un sistema piloto de Historia Clínica Electrónica interoperable; financiar equipos de telemedicina para clínicas rurales; desarrollar una **Plataforma de Telesalud integrada**; y asesorar en la construcción de un marco normativo sanitario digital que otorgue validez legal a las atenciones digitales.





Justicia digital: el sistema presenta rezagos estructurales, pese a esfuerzos iniciales como el SIREJ (consulta de expedientes en línea), el portal “Justicia Libre” (presentación electrónica de escritos) y el proyecto de Ley de Justicia Digital en debate. Las brechas incluyen que la mayoría de los juzgados aún opera con expedientes físicos, una adopción tecnológica desigual y falta de interconexión institucional. En esta dirección, se requiere diseñar e implementar un **Expediente Judicial Electrónico** integral, con equipamiento y capacitación; promover la interoperabilidad judicial mediante la integración de plataformas de policía, fiscalía y tribunales; acompañar la aprobación de la **Ley de Justicia Digital** con la reglamentación de la firma digital, audiencias virtuales y notificaciones electrónicas; y crear una **Ventanilla Única de Servicios Judiciales en Línea**.

Fiscalidad y administración tributaria: el SIN implementa gradualmente el Sistema de Facturación Electrónica desde 2021, con la meta de lograr una inclusión casi total para 2025–2026. Las brechas incluyen alta informalidad (60 % del empleo), cobertura limitada en micro y pequeños negocios e integración incompleta de datos entre sistemas tributarios. En esta dirección, se requiere: (1) fortalecer la facturación electrónica con kits simplificados para pequeños contribuyentes; (2) implementar herramientas de Big Data e inteligencia artificial para la detección de evasión; (3) impulsar una “Ventanilla Única Tributaria” que integre impuestos nacionales, municipales y aportes a la seguridad social; y (4) establecer programas de educación fiscal digital dirigidos a comerciantes, pymes y ciudadanía.

Agricultura intensiva: se propone respaldar al gobierno en la planificación sectorial y en la implementación del PDES, en coordinación con organismos multilaterales especializados. El apoyo técnico-productivo se concentrará en cadenas con potencial de crecimiento y generación de valor (carne bovina, soya y derivados, agroindustria, agricultura familiar, acuicultura y pesca) garantizando inclusión social, sostenibilidad ambiental y aprovechamiento responsable de los servicios ecosistémicos.



Financiamiento al sector productivo y turístico: se prevé intervenir mediante líneas de crédito a bancos públicos y privados para canalizar recursos hacia sectores estratégicos, con énfasis en la micro y pequeña producción, mujeres emprendedoras y proyectos eficientes y ambientalmente sostenibles. Complementariamente, se impulsará un programa de inversión para elevar la productividad y resiliencia del sector agrícola, acompañado de cooperación técnica especializada.

Turismo sostenible e inclusivo: se apoyará el diseño del Plan Nacional de Turismo Sostenible y el posicionamiento de la marca país como herramienta de proyección internacional. Una vez definidas las políticas sectoriales, se promoverá la elaboración de una Guía de Inversiones Turísticas para atraer inversión privada nacional y extranjera.

Fortalecimiento de capacidades y economías creativas: se propone fortalecer las capacidades de los funcionarios nacionales, provinciales y municipales en identificación, formulación y monitoreo de proyectos turísticos, así como apoyar al sector privado mediante financiamiento de proyectos con impacto social. Asimismo, se impulsará el desarrollo de economías creativas, transformando el patrimonio cultural del país en un motor de desarrollo mediante asistencia técnica, financiamiento e infraestructura pública adecuada.

Economía popular y asociativa: se apoyará el diseño de una estrategia integral para fortalecer las capacidades individuales y productivas de los actores de la economía popular, mejorando su productividad, empleabilidad y acceso a una formalidad útil que facilite el acceso a servicios, financiamiento y mercados. Asimismo, se brindará asistencia técnica para una estrategia nacional de inclusión financiera y se fortalecerá la banca de desarrollo nacional (Banco de Desarrollo Productivo, BDP) mediante líneas de crédito y cooperación técnica orientadas a mejorar su gobernanza, sostenibilidad y rol en el desarrollo productivo inclusivo y en el mercado de bonos temáticos y finanzas verdes.

La promoción del turismo y la conectividad con el resto del mundo es clave, no solo como opción de desarrollo, sino también para posicionar al país como un destino relevante para el turístico, el comercio y la inversión.





Un desafío a superar es la normativa y los incentivos tributarios que restringen la inversión privada, incluso en sectores estratégicos, lo que ha limitado el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED). Estas restricciones se explican, en parte, por limitaciones normativas a la participación privada en el sector energético, hidrocarburos, electricidad, minería, telecomunicaciones, entre otros. En otros casos, los costos administrativos, tributarios, operativos y logísticos para el desempeño del sector privado, junto con los institucionales para garantizar la seguridad jurídica, constituyen factores que deben superarse para impulsar la inversión privada, nacional y extranjera. En este sentido, CAF movilizará su conocimiento de buenas prácticas internacionales y regionales, así como **cooperación técnica para mejorar dicha normativa y diseñar incentivos más eficientes y efectivos para alentar la inversión privada.**

Por otra parte, CAF busca apoyar particularmente al sector energético, dado que Bolivia

requiere fortalecer la seguridad energética y la sostenibilidad del sector. El país necesita disminuir su dependencia del gas natural, lo que implica apoyos tanto en la planificación, aprovechando de manera más eficiente su canasta energética, con alto potencial en fuentes renovables convencionales (recursos hídricos) y no convencionales, así como en el manejo del gas como energético de transición. Adicionalmente, el país necesita consolidar un marco regulatorio robusto que facilite la implementación efectiva de las políticas de transición energética. En este sentido, CAF apoyará con asistencia financiera y técnica, más allá de proyectos de inversión, las planificaciones y reformas normativas que el gobierno considere necesarias.

El sector minero constituye un área con alto potencial para apalancar el desarrollo económico del país, pero requiere estrategias de inversión, valor agregado y sostenibilidad ambiental. CAF, en coordinación con CEPAL, apoyará el fortalecimiento de la Estrategia Nacional del Litio y, a partir de esa estrategia y de las necesidades del gobierno, se dará

soporte al desarrollo sostenible de una cadena de valor tan estratégico como la del litio.

Con respecto al tercer eje de gobierno: “Bolivia moderna y eficiente”, CAF busca apoyar desde el fortalecimiento institucional para la regulación, planificación y gestión, referidos en el primer pilar, hasta el impulso de la digitalización que favorezca la inclusión, productividad, y el impulso de un Estado moderno y más eficiente que mejore los servicios al ciudadano y al productor.

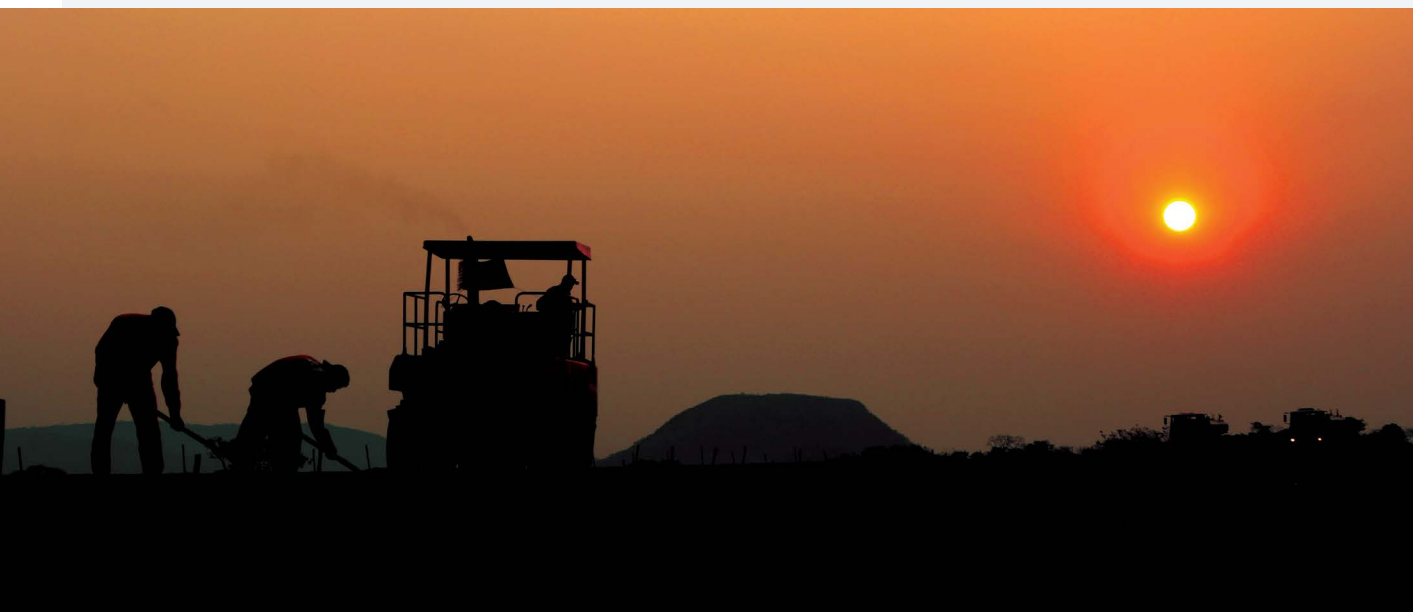
Un Estado moderno y eficiente deber ser capaz de garantizar coherencia y continuidad en la planificación y gestión de las políticas públicas, con el fin de mejorar las condiciones de desarrollo y los servicios al ciudadano. En este proceso, CAF puede desempeñar un rol estratégico a través de fondos no reembolsables de cooperación técnica que acompañen al gobierno en la modernización de sus marcos regulatorios, el fortalecimiento institucional y la articulación de los diversos actores económicos y sociales.



El país presenta **espacios de mejora institucional para impulsar su desempeño económico e incrementar la confianza en las políticas públicas.** La actualización de los marcos regulatorios es clave para acompañar la transición de Bolivia hacia un modelo de desarrollo y bienestar inclusivo y sostenible en lo cual CAF puede apoyar con asistencia técnica y proyectos de inversión. En energía, por ejemplo, el esquema vigente no favorece la inversión privada ni la expansión de renovables: la fijación de precios del gas natural distorsiona costos, mientras la ausencia de contratos PPA, APP y marcos contractuales modernos limita nuevas inversiones. En hidrocarburos, los incentivos a la exploración siguen siendo débiles y las nuevas oportunidades de integración regional requieren reglas claras. En agua, un marco legal desactualizado contribuye a la fragmentación institucional, mientras que en transporte coexisten normas dispares entre jurisdicciones y no existe una autoridad nacional técnica para vías navegables. En el sector aéreo, pese a los avances institucionales, el marco normativo y la ausencia de acuerdos amplios de cielos abiertos han restringido

el ingreso de nuevos operadores. En telecomunicaciones, pese a la Agenda Digital 2030, aún falta una hoja de ruta para su implementación y normas modernas de ciberseguridad y protección de datos. La baja competencia y concentración del mercado mantienen la inversión en niveles mínimos, lo que evidencia la necesidad de modernizar la regulación para atraer capital y dinamizar los sectores estratégicos.

En el tercer eje del Plan de gobierno: “Bolivia 50/50”, en la parte correspondiente al fortalecimiento y desarrollo desde las regiones, CAF propone brindar asistencia técnica y financiera para el desarrollo de infraestructura no solo vial y digital, sino también productiva, incluyendo un programa de diez presas resilientes, medianas y grandes, que contribuyan a la regulación de los ciclos hídricos y al riego; junto con un proyecto de más de 300 puentes que apoyen el desarrollo rural en todas las regiones del país. Estos proyectos se complementan con programas de agua y saneamiento y otros proyectos productivos y turísticos que se implementan en territorios específicos.





Inclusión y desarrollo social

El tercer pilar de acciones se centra en la inclusión y desarrollo social y se corresponde con el sexto eje del plan de gobierno: “Bolivia, bienestar para todos”. En este campo, CAF pretende destinar recursos para articular acciones en seguridad hídrica, servicios esenciales (energía, agua y saneamiento), salud, educación, arraigo comunitario y sistema de cuidados con sentido de equidad de género y con el objetivo de cerrar brechas sociales, garantizar la cohesión territorial y fortalecer las capacidades humanas del país.

La seguridad hídrica en Bolivia representa una oportunidad estratégica para garantizar sostenibilidad, mejorar la productividad, generar energía limpia y promover mayor inclusión social y resiliencia climática. Avanzar en la gestión de cuencas mediante planes integrales permitirá mejorar la gobernanza del agua, optimizar su uso y enfrentar tanto la gestión de sequías como el control de inundaciones en zonas urbanas vulnerables. Asimismo, aumentar el acceso seguro y eficiente al agua y saneamiento, en particular en ciudades intermedias, pequeñas y áreas rurales, así como la gestión de residuos sólidos en las ciudades intermedias, junto con una adecuada gestión de la demanda (optimización del uso y reducción de pérdidas). Finalmente, expandir el riego para la agricultura familiar desde obras de cabecera —presas—, canales primarios y secundarios y el equipamiento intra-predial, consolidando programas exitosos como los efectuados entre 2011-2025, que en conjunto permitirán mejorar la productividad rural, la seguridad alimentaria y el desarrollo territorial inclusivo. La propuesta

es formular e implementar programas integrales de alcance nacional, en fases, que posibiliten continuar con el cierre de brechas en agua, saneamiento y gestión de residuos sólidos. Estos deben incluir consideraciones relativas al fortalecimiento institucional y el desarrollo comunitario que garantice su sostenibilidad. Adicionalmente, teniendo en cuenta la reestructuración de los ministerios a nivel gubernamental, es posible acompañar la implementación de políticas públicas y el fortalecimiento de una institucionalidad que apoye la sostenibilidad del sector y las inversiones sectoriales.

De igual modo, se propone un Programa Integral de Vivienda Social y Sostenible orientado a reducir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo mediante la construcción de viviendas sociales y la ampliación de los canales de financiamiento, incorporando instrumentos financieros adecuados y promoviendo la regularización de la tenencia de la tierra para facilitar el acceso a créditos.

En el ámbito de la salud y la protección social, se plantean programas orientados a generar un impacto estructural y ampliar la cobertura: un Programa para la Primera Infancia, centrado en la reducción y prevención de la desnutrición crónica infantil mediante intervenciones integrales en salud, nutrición, educación y acceso a servicios básicos. Este programa partirá de una propuesta de redes integradas e integrales de salud para prestar servicios materno-infantiles con impacto en la salud y nutrición de los niños. Dentro de las prestaciones, se priorizarán servicios como controles prenatales, controles de niño sano, vacunación, consejería y promoción del cuidado cariñoso. La priorización y articulación de estos servicios a distintos niveles permitirá brindar los cuidados adecuados a la primera infancia a la vez que se hace uso eficiente del presupuesto público.

Adicionalmente, se propone desarrollar Programa de Fortalecimiento del primer nivel de atención a través de la implementación de tecnologías digitales e inteligencia artificial para mejorar la oferta y calidad de los servicios de manera costo efectiva. Esto puede vincularse con la consolidación de un sistema logístico de medicamentos para ofrecer un servicio integral al paciente y mejorar la eficiencia del sistema. CAF cuenta con experiencia en la implementación de proyectos de telesalud con inteligencia artificial en la región que pueden trasladarse a Bolivia para fortalecer la oferta de salud del país.

Con respecto a Seguridad Alimentaria y Nutrición, se propone el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar mediante su articulación con la agricultura familiar. Esto mejorará la calidad de los alimentos ofrecidos en el programa, así como la nutrición de los niños beneficiarios, a la vez que promoverá la economía

local y mejorará los medios de vida de la agricultura familiar. Esto puede incluir la reforma de cocinas escolares, la adecuación de menús para mejorar la calidad nutricional, la capacitación y sensibilización de personal y comunidades, y el fortalecimiento a pequeños productores (infraestructura, insumos, generación de cooperativas, etc.) Finalmente, se tiene previsto un Programa para la adecuación y modernización del Sistema de Protección Social, el cual buscará fortalecer la articulación institucional y la identificación de beneficiarios a través de un registro temprano, automático e integrado.

En coherencia con el compromiso planteado en el eje “Bolivia, bienestar para todos” en cuanto a promover el acceso efectivo a servicios sociales y políticas de inclusión con énfasis en mujeres, niñez, adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas, originarios o campesinos, CAF propone apoyar el desarrollo y articulación de un sistema de cuidados. Para ello, se buscará apoyar la expansión y mejora de la oferta de cuidados mediante estándares de calidad, modalidades comunitarias e interculturales y articulación con salud, educación y protección social. De forma complementaria, se impulsará la profesionalización y formalización del trabajo de cuidados, incluyendo formación, certificación de competencias y mejoras graduales de condiciones laborales. Asimismo, se promoverá el fortalecimiento de la arquitectura institucional y de los sistemas de información para identificar necesidades de cuidado, ordenar rutas de atención y orientar la planificación y el financiamiento, aprovechando los avances en digitalización y mejora de la gestión pública.

Por otra parte, se plantea impulsar la iniciativa promovida por CAF “Programa Arraigo Comunitario” a través de la cual se buscaría





contribuir a reducir las brechas sociales y económicas de pueblos indígenas y afrobolivianos, integrando la cultura y la identidad local en el desarrollo de las comunidades étnicas.

En el ámbito educativo, se plantea impulsar un Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad del Aprendizaje que coloque en el centro la formación inicial y continua de maestras y maestros, asegurando que su preparación sea pertinente, actualizada y capaz de responder a los desafíos de un sistema educativo diverso y en constante transformación. Este plan no solo fortalecerá las competencias pedagógicas, sino que apoyará una formación inicial docente innovadora que fortalezca los conocimientos disciplinares de los aprendizajes fundamentales como

lengua, matemática y ciencias, así como el conocimiento y la práctica de habilidades digitales y socioemocionales que permitan la transformación de las prácticas educativas en el aula y, por lo tanto, la mejora sostenida de la calidad educativa en el país. La propuesta también consolidará mecanismos de evaluación rigurosa de la calidad del aprendizaje, garantizando que cada estudiante alcance niveles óptimos de comprensión y desempeño, empezando justamente por apoyar la implementación de estrategias de evaluación censal y muestral de los aprendizajes para impulsar políticas basadas en evidencia. A ello se suma la incorporación estratégica de conectividad y digitalización, bajo criterios de educación inclusiva, que permitirá aprovechar la tecnología como

herramienta pedagógica para cerrar brechas y democratizar el acceso al conocimiento.

En el ámbito de la empleabilidad juvenil, se propone el fortalecimiento de la formación técnica y profesional mediante el Programa de Capacitación Laboral y Formación para el Empleo, concebido como una política clave para enfrentar el desempleo juvenil y la informalidad. Este programa busca incrementar la productividad nacional, reducir desigualdades sociales y potenciar la innovación, vinculando la formación académica con las demandas reales del mercado laboral. De esta manera, cada joven formado en competencias técnicas y profesionales se convierte en un motor de desarrollo económico y social, capaz de transformar la estructura productiva del país.



Sostenibilidad ambiental y equidad

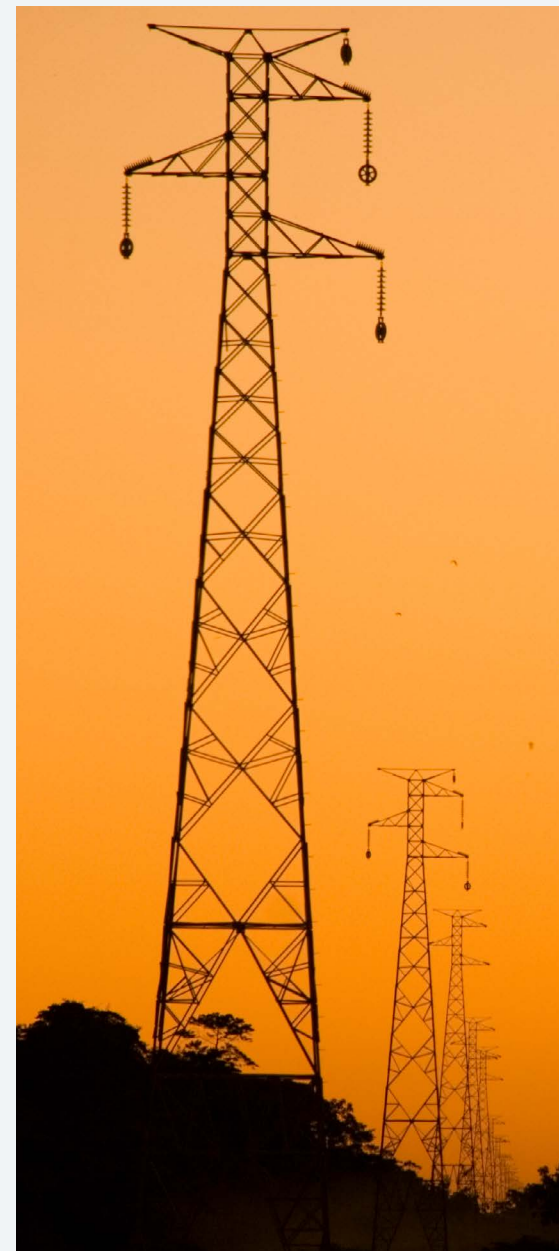
Finalmente, como cuarto pilar, se destaca la sostenibilidad ambiental entendida como un desafío estructural y una condición clave para el desarrollo sostenible de Bolivia. En este sentido y en apoyo al sexto eje propuesto por el gobierno: “Bolivia resiliente y sostenible”, se proponen algunas líneas de acción relevantes.

El país combina una alta vulnerabilidad climática con una limitada capacidad de adaptación: sequías e inundaciones —que constituyen riesgos para la seguridad hídrica—, el aumento de temperaturas y la exposición a los fenómenos de El Niño y La Niña, impactan infraestructura crítica, servicios básicos y medios de vida urbanos y rurales. Los incendios han afectado de manera creciente los ecosistemas y las poblaciones, llegando a su máximo histórico en 2024. La degradación de tierras y la baja efectividad en el manejo de áreas protegidas impactan negativamente en el capital natural del país y en las comunidades. Se observan corredores viales expuestos a inundaciones, drenajes urbanos insuficientes y servicios sensibles a sequías, lo que refuerza la urgencia de fortalecer la gestión integrada del agua. En un contexto de mayor presión climática sobre ciudades y sistemas productivos, persisten brechas en acceso y calidad, pérdidas físicas y comerciales elevadas y baja eficiencia de riego.

Además, la resiliencia de hospitales y escuelas frente a eventos extremos es limitada, mientras que la transición energética y digital plantea nuevos desafíos en la gestión de residuos y en la prevención de pasivos ambientales.

Para confrontar el cambio climático y el deterioro ambiental, la transición energética hacia energías renovables y la gestión sostenible de biodiversidad y recursos naturales son clave.

En el sector energía, la planta solar Chichas, reemplazará 265 GWh de energía termoeléctrica en un año promedio, reemplazando 1934 MMPC de gas natural y evitando 108905 toneladas equivalentes de CO₂. Bolivia posee un potencial importante de energías renovables que podría seguir explotando para suplir el déficit de gas natural y sustituir a las termoeléctricas en la generación de electricidad. Además, recursos del sector privado deben acompañar la inversión pública.





En el este sector, en el marco del nuevo periodo de gobierno, la acción CAF en infraestructura energética de Bolivia coadyuvará en:

1. Sustituir la generación de electricidad con base en gas natural por fuentes renovables.
2. Fortalecer los sistemas de transporte y distribución de electricidad para la implementación del “Plan de Expansión del SIN con participación de Energías Renovables Periodo 2024-2050”.
3. Promover la ciberseguridad de la infraestructura energética.
4. Apoyar el desarrollo de infraestructura para la movilidad eléctrica y cumplir con las metas de electrificación nacional.
5. Apoyar el desarrollo sostenible y equilibrado de la industria de la minera estratégica.
6. Identificar una hoja de ruta para el desarrollo del hidrógeno verde.
7. Apoyar el desarrollo de planes de eficiencia energética.
8. Cumplir con los CND - “Contribución Nacionalmente Determinada” del Estado Plurinacional de Bolivia al año 2030.9. Asistencia técnica y financiera para la logística energética estratégica como los gaseoductos.

Ante este escenario, CAF propone **acciones centradas en la sostenibilidad ambiental**, con énfasis en la **conservación y uso sostenible de la biodiversidad** y en la **acción climática** para continuar impulsando la transición energética a través de proyectos de energías renovables y el desarrollo de instrumentos financieros innovadores orientados a la creación de mercados de activos ambientales, bonos verdes y mecanismos de movilización de recursos.

Por otra parte, se propone brindar apoyo para la gestión de riesgo de desastres mediante instrumentos

financieros de transferencia de riesgos y sistemas de alerta temprana multiamenaza y agroclimática.

Finalmente, se plantea el uso de una operación de Canje de Deuda por Naturaleza para proteger áreas de conservación, reforzar el control de incendios y gestionar de manera más eficiente la deuda pública. De forma complementaria, el desarrollo de un Programa de Ecoturismo en la Amazonía y los Andes bolivianos puede convertirse en un motor de desarrollo inclusivo, combinando la preservación ambiental con la generación de ingresos sostenibles para las comunidades locales.



Aportes transversales



Bolivia afronta **desafíos en el ámbito de la seguridad y la justicia** que representan una oportunidad para fortalecer sus instituciones y consolidar el desarrollo sostenible. La necesidad de avanzar en la modernización del sistema judicial, penitenciario y policial, así como en la prevención del delito y la atención integral a las comunidades, abre un espacio propicio para impulsar políticas públicas integrales y coordinadas. Entre otras iniciativas, CAF se encuentra adelantando **proyectos de modernización** penitenciaria en Perú y en la República Dominicana, combinando **financiamiento con un acompañamiento técnico** cercano, un modelo que puede ser replicado en Bolivia. Estos esfuerzos

contribuirán a reforzar la confianza ciudadana y a consolidar un entorno de mayor cohesión social y vigencia del Estado de derecho.

Finalmente, CAF está comprometida con la transversalidad de la perspectiva de género, la inclusión de personas con discapacidad y diversidad étnica racial en su accionar en Bolivia, con el propósito de integrar las necesidades e intereses de las mujeres, personas con discapacidad, afrodescendiente e indígenas en todas sus operaciones, más aún en un país en el cual la multiculturalidad y la existencia de diversas nacionalidades indígenas enriquecen el patrimonio cultural boliviano y requieren oportunidad de desarrollo.

Impacto



En conjunto con el impulso de este Programa de apoyo a la Reactivación Económica de Bolivia entre los años 2025 y 2030, se espera que CAF contribuya al Plan de desarrollo Económico y Social del país del nuevo gobierno y aporte, solo con la acción CAF, **un crecimiento del PIB en**

1,1 puntos porcentuales durante los próximos cinco años, además de generar más de **100 mil empleos directos e indirectos**. Con ello, se espera alcanzar a más de **3 millones de beneficiarios** a través de intervenciones en sectores prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional.



6. Referencias

- AC&A, Agosta, R., Martínez, J. P., Kohon, J., Pérez, J. E., Blas, F., & de Cubas, I. (2020, May 4). Bolivia. Análisis de inversiones en el sector transporte terrestre interurbano latinoamericano a 2040. CAF. <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1556>
- AGETIC. (2025). Agenda Digital 2030 (D.S. N.º 5367). <https://agetic.gob.bo/sites/default/files/2025-07/Anexo%20D.S%20N%C2%B0%205367%20-%20Agenda%20Digital%202030-firmado%20%281%29.pdf>
- AGETIC. (s. f.). Datos abiertos. <https://agetic.gob.bo/tramites-y-servicios/herramientas-y-servicios-digitales/datos-abiertos>
- Agramont-Lechín, D. (2025). *Transición energética y materiales críticos: oportunidades para Bolivia de la nueva minería*. Friedrich Ebert Stiftung – Bolivia.
- Allub, L., Álvarez, F., Alves, G., Cont, W., Juncosa, F., & Odriozola, J. (2024). Energías renovadas: Transición energética justa para el desarrollo sostenible (RED). CAF. <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2248>
- Alves, G., Brassiolo, P., Buccari, F., Camacho, C., Cifuentes, R., Estrada, R., & Fajardo, G. (2025). Soluciones cercanas: El papel de los gobiernos locales y regionales en América Latina y el Caribe. CAF. <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2430>
- Álvarez, F., Eslava, M., Sanguinetti, P., Toledo, M., Alves, G., Daude, C., & Allub, L. (2018). Instituciones para la productividad: Hacia un mejor entorno empresarial. CAF. <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1343>
- Analytics (Brasil). (2024). La transición energética de América Latina y el Caribe: Una visión de sus oportunidades y desafíos hasta 2050. CAF. <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2309>
- Brichetti, J. P., Mastronardi, L., Rivas, M. E., Serebrisky, T., & Solís, B. (2021). La brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe: Estimación de las necesidades de inversión hasta 2030 para progresar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación. (2025). Formación docente inicial y continua para enfrentar la crisis educativa. CBDE.
- CAF. (2020a). *ARES Bolivia 2020 – Documento técnico*. Dirección de Análisis Sectorial.
- CAF. (2020b). *ROAD Bolivia 2020 – Documento técnico*. Dirección de Estudios Macroeconómicos.
- CAF. (2021). *Gobernanza del sector de infraestructura y de las APP*.
- CAF. (2025a). *Análisis regulatorio y sectorial: Bolivia (ARES)*. Dirección de Análisis Sectorial.

- CAF. (2025b). *Retos y oportunidades al desarrollo: Bolivia (ROaD)*. Dirección de Estudios Macroeconómicos.
- CEPAL. (2025). *Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025*. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/82514-indice-latinoamericano-inteligencia-artificial-ilia-2025>
- CEPAL. (2026). CEPALSTAT: Base de datos y publicaciones estadísticas. <https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/index.html?lang=es>
- Digital Watch Observatory. (s. f.). *Agenda Digital 2030 of Bolivia*. <https://dig.watch/resource/agenda-digital-2030-of-bolivia>
- Economist Impact. (2024). *Infrascopes 2023/24: Country profile – Bolivia*. The Economist Group. <https://impact.economist.com/new-globalisation/infrascopes-2024/en/>
- Estado Plurinacional de Bolivia. (2020). Tercera Comunicación Nacional ante la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
- Fajardo, G., López, M., Ramírez, A., Román, C., Silveira, A., & Zarama, D. (2021). *Gobernanza del sector de infraestructura y de las APP*. CAF. <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1774>
- Fajardo, G., Sanguinetti, P., Vargas, J., Brassiolo, P., Estrada, R., Berniell, L., & de la Mata, D. (2019). *RED 2019: Integridad en las políticas públicas*. CAF. <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1503>
- Fundación Friedrich Ebert – Bolivia (FES). (2025). *La senda hacia la transición energética en Bolivia*.
- Fundación Jubileo. (2021). *Temas clave para la gestión de gobernaciones y municipios: Elecciones departamentales, regionales y municipales 2021*. Serie Debate Público N° 84.
- Fundación Jubileo. (2024). *Situación de la salud en Bolivia*.
- Fundación Jubileo. (2025a). *Diagnóstico sectorial del sector energético e hidrocarburos en Bolivia*.
- Fundación Jubileo. (2025b). *Propuestas de política para la transición energética en Bolivia*.
- Fundación Jubileo. (2025c). Líneas de acción para promover la transición energética en Bolivia.
- INFRALATAM. (s. f.). *Inversión pública en infraestructura económica en América Latina y el Caribe*. Alianza BID – CAF – CEPAL. <https://www.infralatam.info/>
- JMP. (2025). *Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000–2024*. OMS & UNICEF.
- Medinacelli, M. (2021). “Breve análisis y prospectiva de la industria del gas natural boliviano: 1980–2021”. *Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico*, 36, 169–226.
- Ministerio de Educación de Bolivia. (2024). *Estadísticas de matrícula en institutos técnicos y formación técnica en Bolivia*.
- OEI. (2025). “Informe sobre empleabilidad juvenil y acceso a educación técnica en Bolivia”.

- Olave, M., Nogales, R., Córdova, P., & Rejas, B. (2020). “Bolivia: Una nueva mirada al rol de los recursos naturales en el crecimiento económico”. *Latin American Research Review*, 55(1), 81–98.
- Protec Data Latam. (s. f.). “Estrategias nacionales de ciberseguridad en Latinoamérica”. <https://protecdatalatam.com/blog/estas-son-las-estrategias-nacionales-de-ciberseguridad-de-los-paises-de-latinoamerica/>
- Sanguinetti, P., Moncarz, P., Vaillant, M., Allub, L., Juncosa, F., Barril, D., & Lalanne, Á. (2021). *RED 2021: Caminos para la integración*. CAF. <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1823>
- SLOTT Consulting SL-CAF. (2024). *Aplicación de la Metodología CAF para el Análisis de Corredores Logísticos de Integración (CLI) en Bolivia: Informe final*.
- SLOTT Consulting SL-CAF. (2024). *Aplicación de la Metodología CAF para el Análisis de Corredores Logísticos de Integración (CLI) en Bolivia: Documento resumen del informe final*.
- UNESCO. (2023). *Informe sobre la calidad de la educación y formación docente en Bolivia*.
- UNICEF Bolivia. (2023). *Condiciones de infraestructura escolar y su impacto en el bienestar estudiantil*.
- Zárate Taborga, G. (2025). *La senda hacia la transición energética en Bolivia. Friedrich-Ebert-Stiftung en Bolivia*.



